

La fuerza de la distancia.



*Hacia una nueva teoría de los
movimientos sociales en América Latina**

Diane E. Davis

New School for Social Research



Introducción

Los modelos teóricos de mayor aplicación en el estudio de los movimientos sociales latinoamericanos son generalmente de origen extranjero, principalmente de Europa, aunque también de Norteamérica. Los esfuerzos desplegados para teorizar estos movimientos mediante un paradigma específicamente latinoamericano, esto es, con una sensibilidad dirigida a captar la singularidad de los fenómenos políticos, sociales y culturales de la región, han sido hasta ahora escasos. A continuación me propongo explicar por qué ha sido así, y luego intentaré remediar la situación presentando una nueva estructura analítica cuyo punto de partida es la noción de espacialidad entendida como un constructo material y social. Para conseguir mi objetivo me apoyaré en los avances de dos de los paradigmas más conocidos, el de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y el de la Estructura de la Oportunidad Política (EOP), pero intentaré ir más allá, enfocando los patrones históricamente específicos de la formación del Estado, las clases, la ciudadanía y los movimientos sociales mismos.

Acerca de la aceptación de los paradigmas europeos y norteamericanos

El estudio de los movimientos sociales ha sido dominado en las últimas décadas, por dos paradigmas rivales, el EOP y el NMS. Quizá el punto de divergencia mayor entre los teóricos de ambos bandos estriba en la preponderancia que los primeros dan al Estado y a sus instituciones (véase Tarrow, 1989; 1988; Tilly, 1984), mientras que los segundos tienden a subrayar la importancia de los fenómenos de la sociedad civil, a la cual identifican como el campo en el que los movimientos sociales contemporáneos

persiguen sus objetivos (véase Cohen y Arato, 1995; Habermas, 1987; Touraine, 1971).¹

En general, los teóricos del paradigma EOP enfocan casi exclusivamente las condiciones probables de respuesta de los actores estatales frente a las demandas de los movimientos; y cuando dirigen su atención a la sociedad civil es para entender los cálculos estratégicos de los actores de los movimientos al evaluar las aperturas y las coyunturas políticas.² Los teóricos del enfoque NMS, en contraste, tienden a ignorar al Estado y los procesos políticos formalmente institucionalizados, privilegiando el análisis de las identidades y objetivos que generan o resultan de nuevas formas de activismo y movilización colectiva (véase Cohen, 1985; Melucci, 1984; Touraine, 1981; 1971; Feher y Heller, 1983).³ Los teóricos de los NMS ven a los movimientos sociales en términos

de su autonomía o distancia respecto de las instituciones del Estado y los procesos políticos formales, y es esta autonomía la que prefigura el carácter y el resultado de los movimientos en un abanico que va desde la emergencia de identidades ajenas a las clases hasta el despliegue de prácticas verdaderamente democráticas. Como lo plantea Claus Offe, "rebasan al Estado" (Offe, 1980, *cf.* Scott, 1990: 17); y es precisamente "la distancia de los movimientos sociales respecto de la política [lo que] ha sido visto como condición de su [sic] éxito" (Scott, 1990:18; ver también Melucci, 1981:1035).

Resulta poco sorprendente entonces que la mayoría de los académicos de América Latina hayan acudido inicialmente a la teoría NMS en busca de guía intelectual, al menos hasta muy recientemente.⁴ El enfoque resultó atractivo para los soció-

1. La diferencia principal entre ambos enfoques no es, entonces, que uno sea más estructuralista y que el otro se enfoque más hacia el examen de la acción, aunque haya elementos que sugieran lo contrario. En efecto, muchos precursores del enfoque NMS estudiaron los grandes procesos estructurales como la formación del Estado y el desarrollo capitalista posindustrial para explicarse por qué los nuevos ciudadanos empezaron a movilizarse a partir de nuevas identidades y nuevos objetivos sociales, mientras que los teóricos del enfoque EOP con frecuencia han "examinado sistemáticamente a los grupos organizadores de las protestas masivas, sus formas de acción y las motivaciones de los individuos que los apoyan." (Klandermans y Tarrow, 1983:3).

2. Recientemente, académicos del enfoque EOP han intentado teorizar sobre la forma en que "las características estructurales de los sistemas políticos penetran las mentes y voluntades de los organizadores y participantes de los movimientos." (Kriesi, et. al., 1995:37) Su respuesta gira en torno a la problematización de un conjunto de factores relacionados con "los costos y beneficios de las acciones colectivas y sus objetivos", los cuales de una forma u otra caen en el dominio del proceso político del Estado: facilitación, represión, éxito, oportunidades de éxito y reforma/amenaza (*Ibid*:38). Así, el Estado permanece como punto de referencia principal.

3. La línea de diferencia conceptual entre estos dos enfoques se puede apreciar tal vez más claramente en el debate actual sobre el uso del calificativo "político" en oposición al calificativo "social", y un poco menos

en las nociones alternativas de "viejo" vs. "nuevo" al categorizar los movimientos sociales. La pregunta inmediata es si los movimientos que apelan al Estado y/o dan importancia a cuestiones de ciudadanía y representación deben ser entendidos como movimientos políticos o sociales, y si deben ser considerados viejos o nuevos si resultan del segundo tipo. Los partidarios del enfoque NMS trazan su raya en la arena sin vacilar. Para ellos, los movimientos del periodo contemporáneo son claramente sociales y forzosamente nuevos precisamente porque "la ciudadanía y, por tanto, el poder político les preocupan menos que la esfera cultural, cuyo foco se constituye por los valores y estilos de vida [...]. Su objetivo es la movilización de la sociedad civil, no la toma del poder" (Feher y Heller, *cf.* Scott, 1990: 16; Melucci, 1984: 823). En efecto, debido a que el objetivo principal de los ciudadanos en las sociedades contemporáneas es percibido como vinculado a la libertad existencial y a la innovación cultural constante, como podría apreciarse en la lucha contra "la colonización del tiempo de vida" por parte de la subestructura tecnocrática (Habermas, 1987a.; Feher y Heller, 1983), la sociedad civil resulta sujeto y objeto de la movilización social. Esto se yuxtapone al pasado, específicamente a los movimientos "viejos" que se identifican por su naturaleza política porque apelan al Estado o buscan el poder estatal.

4. Esto es verdad no solo para el estudio de los movimientos sociales latinoamericanos sino para la sociología en su conjunto. Ver Brachet-Márquez (1997) y Paoli (1997).

logos y politólogos latinoamericanos porque les pareció adecuado para su experiencia e ideales normativos. El énfasis en la existencia de estados represivos que “colonizaron” el mundo de vida, pareció haber hecho eco de sus preocupaciones sobre los gobiernos burocrático-autoritarios y la ausencia de democracia. De igual manera, el importante papel político jugado por actores sociales ajenos a la clase obrera organizada resonó en sus propios sentimientos activistas como intelectuales. Más aún, la idea misma de trabajar directamente con o dentro de esas instituciones estatales represivas fue anatema para muchos intelectuales y activistas de los movimientos sociales. La apelación a la sociedad civil tuvo sentido en teoría, así como en la práctica. A partir de la presencia de estados fuertes y autoritarios a menudo se hizo políticamente inviable la organización de los movimientos en torno a demandas de clase y, por ello, la nomenclatura “nuevo” pareció justificar el uso estratégico de identidades alternativas, incluso cuando el objetivo real fuera la lucha de clases.

La amplia aceptación de la teoría de los NMS, además de su adecuación al contexto regional, pareció obedecer también a razones adicionales; las redes sociales igualmente cumplieron su parte. Durante décadas muchos estudiantes latinoamericanos viajaron a Europa, especialmente a Francia, a realizar estudios de doctorado en ciencias sociales y filosofía. Muchos de ellos estudiaron con los sociólogos que popularizaron el paradigma NMS después de las rebeliones estudiantiles de 1968, Alain Touraine en Francia, entre ellos; y no es exagerado decir que muchos de los sociólogos líderes y académicos de los movimientos sociales en América Latina estudiaron o fueron directamente influidos por su formación intelectual y experiencia en Europa en ese tiempo. Su apertura a las teorías europeas

de los NMS incluso pudieron deberse al hecho de que los académicos europeos, a diferencia de sus colegas estadounidenses, estaban más dispuestos a traspasar los límites de la filosofía y la teoría social y adoptar el marxismo, aun cuando se propusieran superarlo, como lo hizo Touraine con la teoría de los NMS, lo que volvió a estas prácticas intelectuales en algo especialmente atractivo para muchos científicos sociales latinoamericanos.

Todos estos factores afianzaron aún más la aceptación de la teoría de los NMS entre los académicos latinoamericanos, especialmente en relación con el otro modelo de la época, el de Movilización de Recursos (MR), enfoque aplicado por académicos de Estados Unidos, que se basa, también, en el estudio de los actores sociales, pero su énfasis recayó en las consideraciones de estrategia y cálculo en lugar de los grandes ideales, fueran socialistas o de cualquiera otro tipo. A diferencia de los proponentes del modelo MR y de los de su sucesor EOP —que se inclinó hacia los estudios cuantitativos o intensamente empíricos de los actores de los movimientos y las organizaciones—, los académicos europeos estudiaron los movimientos sociales para generar proposiciones generales sobre la ocurrencia de acontecimientos sociales a gran escala y gran poder en las sociedades capitalistas, proposiciones que se aproximaron a los grandes esquemas teórico-filosóficos. En aquel mercado cautivo de opciones, el modelo NMS se vendió bien.

¿Redes nuevas o paradigma adecuado?

La liberalización, sin embargo, puede estar dejando su huella. Así como las fronteras entre América Latina y Estados Unidos son ahora rutinariamente cruzadas por el capital y las mercancías, así estamos atestigüando una creciente apreciación y uso

intelectual de los modelos norteamericanos sobre los movimientos sociales, especialmente el enfoque EOP desarrollado por académicos residentes en Estados Unidos como Sidney Tarrow, Charles Tilly, Doug McAdam, John McCarthy y Mayer Zaid (Roberts, 1997:139). Que esto esté ocurriendo hoy puede ser un testimonio del crecimiento de una nueva cohorte de estudiantes latinoamericanos educados en instituciones estadounidenses.⁵ Conforme pasa el tiempo y la liberalización modifica el ambiente geopolítico, los vínculos intelectuales entre las instituciones y los académicos de Estados Unidos y América Latina se profundizan, mientras la influencia europea empieza a languidecer, lo cual explica el cambio en el terreno de los paradigmas.⁶

Las redes sociales, sin embargo, no lo explican todo. También parece haber fuertes razones empíricas detrás de la creciente aceptación del enfoque EOP y del subsecuente desafío a la singular hegemonía del paradigma NMS. Una razón es que el modelo EOP es, en sí mismo, un gran adelanto respecto del paradigma estadounidense previo, el MR. Otra razón podría ser la rápida declinación del enfoque marxista en las ciencias sociales en América Latina (¿otro subproducto de la liberalización?), lo cual ha vuelto a los académicos de la región más recepti-

vos hacia un paradigma como el EOP, que generalmente se asocia con enfoques no marxistas de la alternativa racional o con los análisis de inspiración weberiana sobre el poder y las instituciones políticas. Una tercera razón, según argumenta Kenneth Roberts, es que el curso de los acontecimientos en América Latina en los años recientes "no ha sido proclive a la visión romántica del potencial transformador de los actores colectivos de base" que han sido objeto de la teoría de los NMS (1997:140). En un extenso ensayo de revisión de los estudios contemporáneos sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Roberts sostiene que:

Lo mejor de la literatura reciente no se limita a celebrar la emergencia de organizaciones de base o la apertura de espacio para expresiones de autonomía cultural o política, sino que hace un esfuerzo serio por entender cómo los movimientos sociales se comprometen con los espacios formales de política institucional y tratan de influir las políticas públicas. Este enfoque evita la tentación de ver en cada nueva manifestación de organización popular un presagio de cambio en las relaciones de poder, y es también sensible a las limitaciones estructurales e institucionales del poder popular. La nueva literatura ha aportado así importantes ideas para comprender muchos de los principales desafíos de los movimien-

5. Hay muchas razones que avalan esta afirmación, aunque su discusión detallada rebasa los límites de este trabajo, algunas de ellas son: el apoyo constante para estudios en el área de parte del Social Science Research Council y la Ford Foundation; la creciente importancia de la Latin American Studies Association en América Latina; el giro neoliberal en la región, que ha animado a las fundaciones e instituciones estadounidenses a ser más receptivas, económica, política y culturalmente con sus vecinos del sur; y el cambio de clima político en América Latina (gobiernos neoliberales y estudiantes menos radicales), lo cual ha animado a los gobiernos latinoamericanos a enviar a Estados Unidos más estudiantes.

6. Esto no quiere decir que la teoría EOP sea exclusivamente estadounidense. También hay europeos que la aplican, entre ellos Bert Klandermans

y Hansdieter Kriesi, de Holanda, entre los más conocidos. Estos no solo han colaborado sistemática y directamente con el politólogo estadounidense Sidney Tarrow en su investigación de largo plazo sobre los movimientos sociales, sino que también han sido influidos por el trabajo del sociólogo residente en Estados Unidos, Charles Tilly, cuya obra sentó las bases de gran parte de la teorización del proceso político y la estructura de la oportunidad política en los años 80 y 90. Más aún, todos estos académicos europeos y estadounidenses por igual, se inclinan a utilizar la nomenclatura "Enfoques europeo y estadounidense de los movimientos sociales" para diferenciarse de los enfoques MR/EOP y NMS (Kriesi, et al. 1995: xxi; Klandermans y Tarrow, 1988; Foweraker, 1995: 2).

tos sociales en la América Latina contemporánea. Entre otros: la tendencia de la movilización popular a debilitarse después de las transiciones hacia gobiernos democráticos, la dificultad de crear vínculos horizontales entre organizaciones de base para ampliar su base política, y las relaciones frecuentemente tensas entre las organizaciones populares y las instituciones formalmente representativas de los regímenes democráticos. (Ibid.:140-41).

Con todo y este progreso, el enfoque EOP sigue siendo utilizado principalmente por los académicos estadounidenses, mientras los latinoamericanos, especialmente los que no han estudiado en Estados Unidos, al igual que los europeos, siguen basándose en los principios del modelo NMS. Como tal, la teorización de los movimientos sociales, al menos en América Latina, está estancada, lo cual podría explicarse en gran parte por las largas disputas ideológicas acerca de la influencia estadounidense en la región, preocupación política real y apremiante, así como la aún no demostrada superioridad de un paradigma sobre los otros. Y mientras los partidarios de uno u otro enfoque compiten en el campo de batalla académico, atrincheramientos paradigmáticos aún mayores asoman en el horizonte.

Sin duda, hay signos de esfuerzos por superar esta división. Algunos estudiosos latinoamericanos intentan integrar en una sola estructura teórica el énfasis del enfoque EOP en las estructuras, los procesos y las oportunidades políticas, y el énfasis del enfoque NMS en la cultura, el significado y las identidades (Tanaka, 1996). Estos esfuerzos y los trabajos empíricos de quienes estudian las identidades y las instituciones políticas en conjunto (ver, por ejemplo, Bennett, 1995; Stokes, 1995) nos alejan del conflicto polarizante que amenaza con paralizar el

campo de estudio. Pero las lealtades académicas todavía siguen orillando a muchos analistas a tomar partido cerrado por uno u otro paradigma, hasta el punto de que diferentes autores que estudian el mismo caso bajo diferente perspectiva presentan argumentos opuestos para el mismo fenómeno (ver Schneider, 1995 y Oxhorn, 1995; cfr. Roberts, 1997:140-42). Igualmente sorprendente es el hecho de que quienes evitan una lealtad estricta hacia determinado paradigma para no atizar el fuego de las disputas académicas —y éstos son cada vez más— parecen conformarse al evitar la adopción de cualquier estructura teórica. Resultado: hay una cantidad creciente de estudios empíricamente ricos pero notoriamente subteorizados. Estos estudios pueden incrementar nuestra comprensión de movimientos particulares en lugares específicos habitados por activistas particulares, pero por carecer de teoría ni desafían ni enriquecen teóricamente nuestra comprensión de los movimientos sociales latinoamericanos.

Pero ¿es esto un problema? Después de todo, no son inusuales los estudios subteorizados, especialmente en esta era posmoderna en donde las grandes narrativas ganan escasa credibilidad y en la que menudean viciosas disputas paradigmáticas con ganadores y perdedores a lo largo del campo de batalla. Tampoco es irrazonable loar los esfuerzos de síntesis paradigmáticas, estrategia legítima y probada en otras subáreas de la disciplina. El problema, sin embargo, radica menos en las honestas estrategias para reconocer o acomodar ambos paradigmas que en los paradigmas mismos. Un examen más detenido sugiere que los modelos EOP y NMS fueron desarrollados para aplicarse a circunstancias históricamente específicas en Estados Unidos y Europa, respectivamente. En este sentido, los esfuerzos para rescatarlos o integrarlos en un solo

enfoque, no digamos para profesar la superioridad de uno sobre otro, están condenados al fracaso.⁷

La historia confronta a la teoría: la hermenéutica de los paradigmas de los movimientos

El paradigma NMS es producto de los esfuerzos de sociólogos franceses por explicar los movimientos estudiantiles de 1968 (Touraine, 1971), si bien la emergencia subsecuente de movimientos ambientalistas, feministas y antinucleares que florecieron en Europa en los 1970s y 1980s influyó también en su desarrollo, especialmente entre sociólogos alemanes preocupados por el industrialismo avanzado y la modernidad (Habermas, 1987a; 1987b; 1976). El movimiento estudiantil fue protagonizado por actores sociales predominantemente de la clase media comprometidos con la transformación de la cultura, la sociedad y el sistema político mismo. Con pocas excepciones, estos estudiantes encontraron generalmente difícil mantener alianzas duraderas con la clase obrera, como ocurrió también con las primeras generaciones de feministas, ambientalistas y activistas antinucleares a pesar de que hicieron serios esfuerzos por conseguir ese objetivo. Igualmente importante es señalar que todos estos movimientos surgieron después del periodo de reconstrucción de posguerra en el que los Estados nacionales (especialmente Francia y Alemania) gozaban del reconocimiento de los ciudadanos por sus esfuerzos de conducir la economía y la sociedad hacia un nuevo nivel de prosperidad y esta-

bilidad política después de la destrucción y desmoralización provocadas por el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial.

El principal aliado de estos esfuerzos fue notablemente el trabajo organizado, cuya participación directa semicorporativista en la construcción del Estado de bienestar de posguerra y en la industrialización nacional reforzó su lealtad política hacia el Estado (o al menos hacia los partidos socialistas y socialdemócratas a través de los cuales reforzaron sus vínculos con él). La creciente oposición al Estado y a la política tradicional que empezó a fines de los 1960s y que continuó en las décadas subsiguientes, no solo representó un parteaguas crítico y un cambio fundamental en la política de posguerra, sino que también generó la idea de que el Estado y el trabajo estaban en un lado del campo de batalla, mientras los ciudadanos sin lealtades de clase obrera y organizados no en partidos ni en sindicatos, sino en organizaciones de la sociedad civil independientes, estaban en el otro. No es sorprendente entonces que los académicos que teorizaron estos movimientos los conceptualizarán como independientes de las clases y "nuevos", encarnando una lógica política y social enteramente diferente.⁸ En los Estados Unidos, las condiciones sociales y políticas eran esencialmente diferentes. Sin duda, aquí fue el movimiento estudiantil de fines de los 1960s y principios de los 1970s lo que atrajo la atención académica hacia el campo de los movimientos sociales. El movimiento en Estados Unidos presentó muchas similitudes con el movimiento estudiantil

7. Más aún, la batalla permanente entre quienes sostienen la superioridad de un paradigma sobre otro puede ser resultado de la incapacidad de ambos paradigmas para explicar las experiencias latinoamericanas, así como de la obtusa competencia académica o de las pobres lealtades académicas, geopolíticas o no, que a menudo afectan a la investigación social. En el caso latinoamericano, ningún partido teórico ha sido capaz

de ganar la batalla intelectual, moral o de otro tipo, ya que ambos modelos están limitados por su especificidad histórica. Así, la batalla continúa. 8. Los alegatos de desclasamiento se basaron en la presunción de que "clase" significaba esencialmente clase obrera. Para quienes definen la noción de clase menos estrictamente como Claus Offe (1985), los NMS podrían ser analizados en términos de clase, esencialmente de clase media.

europeo, incluyendo la época de aparición, los esfuerzos hacia la transformación de la cultura y la sociedad y el propósito de lograr una mínima articulación con las preocupaciones de clase del trabajo organizado o movimiento sindical. Más aún, el movimiento estudiantil estadounidense fue también el origen del activismo feminista, ambientalista y antinuclear de las décadas siguientes, como ocurrió en el viejo continente. Mientras en Europa el fuerte y socialmente benévolo Estado de bienestar que buscaba estos objetivos estaba bien establecido y así podía ser censurado cuando la realidad no coincidía con la retórica, el aún más benévolo Estado de bienestar y el sistema de partidos permanecieron como objetivo de muchos activistas, incluso en el papel. No es sorprendente entonces que los teóricos de Estados Unidos que estudiaban estos movimientos desarrollaran perspectivas diferentes y que enfocaran e identificaran al Estado y la política formal —así como las estrategias y la capacidad disponible para presionar al Estado para que escuchara sus demandas—, no la sociedad civil, como punto de partida.

No es sorprendente que la cuestión de la lealtad y la identidad de clase en el estudio de los movimientos sociales resultara mucho menos decisiva en Estados Unidos. En Europa, los estudiosos de los movimientos sociales identificaron el rechazo de la identidad de clase y la lucha de clases misma como puntos cardinales de muchos movimientos sociales, proposición que, a su vez, reforzó las pretensiones de “novedad”. Muchos movimientos sociales de fines de los 1960s y posteriores rechazaron la política de la clase obrera como respuesta a los problemas de entonces. Mas esto se debió al hecho de que los movimientos de clase obrera se habían involucrado directamente en la política formal como actores principales en los partidos gobernantes y

en las coaliciones de los estados de bienestar. De este modo, los fracasos de la política del Estado y de la clase obrera resultaban íntimamente relacionados con la experiencia europea. En los Estados Unidos, en cambio, el papel y la relación de la clase obrera organizada respecto del Estado fue totalmente diferente debido a la cultura política en general y a la guerra fría en particular.

Por un lado, esto se explica porque cuando los obreros estadounidenses encontraron lugar en la política formal no fue a través de partidos socialistas, comunistas o socialdemócratas. Antes bien, lo hicieron principalmente a través del Partido Demócrata, que era ideológicamente mucho más centrista y, por lo general, se mostraba reacio a blandir identidades o demandas de clase como estrategia principal. Por el otro, algunos de los elementos más activos y progresistas del movimiento obrero en Estados Unidos estaban en pugna con su propio liderato y apelaban a demandas de democracia en las bases como consigna principal. Por esta razón, las distinciones europeas entre identidades y tácticas “nuevas” y “viejas” resultaron mucho menos claras en el contexto de Estados Unidos. En efecto, algunos de los activistas laborales apóstatas se inclinaron a considerarse la encarnación de los objetivos culturales, políticos y organizativos “nuevos” de los movimientos sociales europeos, y tal vez habrían abominado que se les viera como meros activistas “viejos” de la clase obrera.⁹ El caso fue que los teóricos estadounidenses no descalificaron a los

9. También es cierto que en Europa muchos movimientos laborales organizados intentaron adoptar las estrategias y tácticas de los nuevos movimientos sociales (Klendermans y Tarrow, 1988: 26). Pero a diferencia de sus contrapartes estadounidenses, esas tácticas fueron usadas en Europa por el movimiento laboral organizado nacionalmente en sus negociaciones con el Estado, mientras que en Estados Unidos fueron adoptadas solo por grupos minoritarios de sindicalistas independientes que impugnaban al liderato sindical y al Estado.

movimientos de clase como remanentes del pasado, ni cargaron sus teorías con la presencia o ausencia de preocupaciones específicas de clase. Que la clase obrera estuviera involucrada o no en movimientos sociales era una cuestión de registro empírico, relevante quizás si abría o cerraba oportunidades políticas para el éxito del movimiento, pero no una prueba de ácido para definir su carácter, o un punto de partida teóricamente significativo para clasificarlo como político o social.

El entrelazamiento del Estado y la sociedad en América Latina

Los paradigmas EOP y NMS pueden decirnos mucho sobre los casos de Estados Unidos y Europa, pero precisamente por esta misma razón es poco lo que nos pueden decir sobre América Latina.¹⁰ No es que la preocupación del enfoque NMS respecto de la sociedad civil promueva la negligencia analítica de los rasgos críticos que operan en el activismo de los movimientos sociales, o que la preocupación del enfoque EOP respecto del Estado fomente la negligencia analítica de los fenómenos de la sociedad civil que pueden ser igualmente importantes. El problema es que ambos paradigmas están contruidos sobre premisas "occidentales" y experiencias específicas acerca de la modernidad, la democracia y la formación del Estado, las cuales no coinciden con las experiencias de América Latina.

Los teóricos europeos de los nuevos movimientos sociales ven la modernización como algo que produce subesferas altamente diferenciadas en las que prevalece una distinción conceptual clara y precisa del Estado y la sociedad. En este sentido, la noción habermasiana de que el Estado puede "colonizar" el mundo de vida, se basa justamente en esa comprensión del Estado y la sociedad civil como esferas separadas. Esta puede ser una descripción precisa de la experiencia europea, para no hablar de su utilidad como instrumento analítico de teorización social, pero está muy lejos de la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos, la cual obedece a procesos diferentes de formación del Estado y desarrollo político. Así como puede haber mucha más represión y control estatal en América Latina que en los estados "modernos", así hay también mucha menor diferenciación conceptual entre el Estado y las esferas sociales.

Sin duda, en muchos países latinoamericanos el Estado es una presencia leviatanesca, visible y sentida en la vida diaria, por no decir deseosa y capaz de intimidar a la sociedad civil. Pero también es cierto que en muchos de estos países el Estado y la estructura de clases han estado históricamente entrelazados de una manera tal que no puede observarse en las experiencias de modernización europea y estadounidense. Este entrelazamiento, que en términos generales se debe a una larga historia de inclusión popular que ha borrado las líneas de falla institucio-

10. Es justo reconocer que algunos de los formuladores del modelo NMS nunca se propusieron aplicar esta teoría en su forma original a América Latina. Esto es evidente en los repetidos alegatos de Alain Touraine de que en América Latina no hay movimientos sociales (cfr. Tamayo, 1996b:56), al menos en la forma en que el propio Touraine los define, declaración que ratifica su propio reconocimiento de que la experiencia latinoamericana de movilización social es totalmente

diferente a la de Europa. Para Touraine los movimientos sociales son fenómenos "modernos" asociados al posindustrialismo (*Ibid*: 57-58). Vale anotar esto porque pone de manifiesto que el problema de gran parte del trabajo teórico actual sobre los movimientos sociales en América Latina radica en que muchos latinoamericanos se apropiaron cegamente del modelo sin preguntarse sobre sus premisas fundamentales.

nales y conceptuales entre el Estado y los actores sociales, es capaz de limitar y ampliar el poder del Estado sobre la sociedad civil (Davis, 1993; 1989).¹¹ Más aún, algunos de los actores sociales más activos en América Latina suelen ser en muchos casos actores estatales, esto es, maestros y otros empleados públicos que frecuentemente se organizan de manera independiente y usan un lenguaje de autonomía en su confrontación con el Estado (Cook, 1996; Foweraker, 1993). Para entender estos movimientos requeriríamos una estructura teórica que reconozca esas identidades duales y que comprenda al Estado y a la sociedad civil simultáneamente en vez de oponer el uno a la otra.

Así como la relación del Estado y la sociedad civil es históricamente única en América Latina debido a los procesos de formación de éste y las clases, así también lo son las estructuras políticas formales que vinculan a los ciudadanos con el gobierno. Y esta relación impone límites a la utilidad de los modelos de Estados Unidos y Europa cuando se aplican a América Latina. Uno de los argumentos clave de los teóricos de los enfoques EOP y NMS es la relación entre movilización popular y democratización, si bien la conciben de diferente manera por diversas razones. Los teóricos del enfoque NMS, con su énfasis en la sociedad civil, trabajan bajo la presunción de que es el acto de la movilización social lo que genera la democracia, ya sea a través de la adquisición de poder, o por el hecho de que introduciendo una forma alternativa de "hacer política" obligan a la autoridad legítima a tomar decisiones en su favor. Los teóricos del enfoque EOP, en contraste, asumen que la democracia se materializa en el contexto del activismo de los movimientos sociales porque éstos, por definición, emergen ahí donde hay oportunidades políticas para provocar la respuesta del Estado.

Ambos argumentos asumen, sin embargo, que hay algún tipo de democracia formal preexistente y que existen estructuras estatales diferenciadas.¹² Los teóricos del enfoque EOP asumen una cierta comprensión liberal de la experiencia democrática de Estados Unidos donde funciona una estructura estatal descentralizada, la cual se conceptualiza como dotada de mecanismos que responden a los movimientos sociales una vez que éstos emergen. De hecho, lo que diferencia a Estados Unidos de Europa es el rol relevante que juegan los así llamados estados locales en la creación de políticas y en responder a las demandas de los ciudadanos (Short, 1980:132; 171). Es por esta razón que los teóricos del enfoque EOP ponen gran énfasis en los mecanismos políticos formales de los estados. Los teóricos del enfoque NMS, en cambio, parten de la experiencia europea en la que un Estado altamente centralizado, aunque democrático, se ha traducido en la generación de pocas oportunidades de respuesta estatal a nivel local. Por esta razón, la democracia ha gravitado primariamente en la esfera de la cultura política y en el lenguaje de lo público más que en la política formal o en la respuesta política del Estado.

Sin embargo, ninguna de ambas rutas de democratización se corresponde con la experiencia latinoamericana, no solo porque la mayoría de los estados no sean formalmente democráticos en es-

11. Un enfoque distinto del entrelazamiento del estado y la sociedad civil en América Latina en Touraine, *Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina* (1987).

12. Aquí sigo a Charles Tilly (1992: 1985, 1987) y Theda Skocpol (1979) respecto de la distinción entre Estado y tipo de régimen político (i. e. democracia, autoritarismo, etcétera). La premisa es que no hay una relación clara entre la forma institucional del Estado (i. e. centralizado vs. descentralizado) y contenido ideológico. Francia y Estados Unidos, ambas democracias, pero el primero altamente centralizado y el segundo

estructura y práctica, sino también porque los mecanismos institucionales que canalizan las demandas de los movimientos sociales y la respuesta estatal son completamente diferentes a los de Estados Unidos y Europa. Es cierto que los estados latinoamericanos presentan la centralización de los estados europeos, pero carecen de las estructuras y las instituciones democráticas formales. Igualmente es cierto que los estados latinoamericanos responden a veces a las demandas de los ciudadanos a nivel local como en los muy descentralizados de Estados Unidos, sin embargo, sus singulares patrones de formación del Estado y las clases determinan que la ausencia de respuestas homogéneas y que éstas no estén jurídica e institucionalmente garantizadas. Es por estas razones, de hecho, que los movimientos sociales latinoamericanos rara vez han contribuido significativamente a la democratización; y por desgracia, bajo ciertas condiciones, precisamente debido a la centralización del poder y a la naturaleza antidemocrática de la mayoría de los países latinoamericanos, los movimientos sociales a menudo han motivado la represión estatal más que la liberación. Más aún, es por esta misma razón que la contribución de los movimientos sociales a la democracia o a la democratización en América Latina no puede ser entendida como si ocurriera en la esfera "pública" autónoma (asumida automáticamente como divorciada de la política) o en el Estado. La mayoría de los activistas de los movimientos sociales asumen que si la democracia se hiciera realidad hoy en América Latina, al menos como un sistema político

tangible erigido sobre un conjunto de estructuras y prácticas participativas formal y constitucionalmente garantizadas, entraría a la agenda una transformación del Estado y la sociedad civil.¹³

En consecuencia, para entender los movimientos sociales en América Latina requerimos una nueva estructura que otorgue igual peso analítico al Estado y al dominio societal; una estructura construida sobre la base de una comprensión histórica de las interrelaciones históricamente dadas de estos dos dominios, y que tome en cuenta los patrones singulares de la formación del Estado. Tal estructura debería contener los elementos que expliquen por qué ciertos movimientos tienen más posibilidades de comprometer al Estado, por qué otros estarían más inclinados a preservar su autonomía, o si habría otros que representen una combinación de ambas tendencias, todo ello, sin asumir que los movimientos deben necesariamente actuar en un sentido o en otro.

Considerar seriamente el espacio

Una manera de lograr estos objetivos es prestando gran atención al espacio. Parto de que los factores espaciales no solo establecen parámetros para la acción sino que interactúan con las fuerzas sociales, las estructuras y las condiciones para producir la acción. En este punto comparto el argumento de Michael Storper y Richard Walker de que "los procesos políticos y económicos en general están conformados por su geografía, y [...] cualquier aparato teórico de ciencias sociales que ignore las dimensiones geográficas de estos procesos (como ha ocurrido a lo largo de casi todos en el siglo xx) lo hace por su cuenta y riesgo" (Storper, 1989:1). También asumo el argumento de Giddens de que "la mayoría de las formas de la teoría social han fracasado al

13. Incluso algunos de los más prominentes teóricos de los nuevos movimientos sociales como Jean Cohen y Andrew Arato, reconocen esto. Para más información sobre la manera en que estos autores conceptualizan la relación entre los movimientos sociales (sociedad civil), la comunidad política y el Estado, véase su autorizado libro *Civil Society and Political Theory*.

no tomar seriamente no solo la temporalidad *sino también los atributos espaciales* de la conducta social" (cfr. Cassell, 1993: 176, énfasis nuestro; ver también Harvey, 1997).

He llegado a esta conclusión no solo a través de textos y argumentos de segunda mano, sino de una evaluación crítica de mi trabajo empírico sobre movimientos sociales urbanos, así como a través del examen detenido de otros estudios empíricos sobre América Latina, la mayoría de los cuales son notorios por su elocuente silencio sobre lo espacial, esto es, por su no consideración de que la naturaleza y objetivos de los movimientos tiene mucho que ver con el lugar donde emergen. La evidencia preliminar sugiere que uno de los determinantes más importantes de la forma que toman los movimientos sociales latinoamericanos y de que sus demandas sean resueltas (ya sea que estén orientados hacia el Estado o hacia la sociedad civil), es que se adecúan a su entorno en vez de ignorarlo. Por ejemplo, en mi trabajo y en el de otros en México ha quedado claro que los movimientos sociales en la capital a menudo se dirigen al Estado porque éste tiene más presencia "local". Más aún, los movimientos sociales en las ciudades capitales y otras grandes ciudades parecen más inclinados a generar alianzas entre las clases, lo que multiplica las posibilidades de éxito, así como se muestran más diestros en contraponer a las estructuras estatales entre sí, orillando de esta forma a la acción del Estado. Esto ocurre no solo porque los movimientos socia-

les emergen en lugares simbólica e institucionalmente representativos, sino porque en las grandes ciudades (especialmente en la capital) hay, por lo general, estructuras estatales más densas y frecuentemente sobrepuestas.

En contraste, los movimientos sociales en áreas rurales o en pueblos de provincia más distantes de la capital parecen ser, relativamente hablando, víctimas más fáciles de la represión, menos inclinados o capaces de negociar con los actores estatales, a consecuencia de lo cual han tenido mucho menos impacto en la política nacional, a menos, por supuesto, que sean capaces de coordinar sus demandas con otros movimientos a lo largo del territorio nacional y/o la ciudad de México.¹⁴ Los movimientos mismos a menudo llegan a esta conclusión, de aquí la emergencia de varias *coordinadoras* de maestros, movimientos sociales urbanos, etcétera, organizadas nacionalmente durante los 1970s y 1980s.

Por supuesto, movimientos en todo México, como en otros países, han sido reprimidos y cooptados, y algunos movimientos sociales en áreas rurales han logrado sorprendentes victorias, mientras que otros en la ciudad de México y otras ciudades grandes han fracasado en muchos aspectos. Pero cuando los movimientos sociales basados en el campo han tenido éxito no ha sido por mantener distancia del Estado sino comprometiendo a los actores e instituciones estatales nacionales con sus propias demandas.¹⁵ Prestar atención al *lugar* en el que emergen los movimientos sociales, es decir, consi-

14. Uno de los mejores trabajos sobre este tema en el caso de México es el de Jonathan Fox, *The Politics of Food in Mexico*. Aunque un poco más antiguo pero igualmente convincente es el estudio de Merilee Grindle, *Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico*.

15. Un hallazgo fascinante —aunque a mi entender insuficientemente teorizado— en la discusión de María Lorena Cook sobre los éxitos y fracasos del movimiento democrático (independiente) de los maestros

en México, es el hecho de que aquellos movimientos regionales más capaces de sostener sus propios éxitos son aquellos que negociaron con el Estado centralizado, mientras los que rechazaron esos vínculos y negociaciones —i. e., que mantuvieron su autonomía— no lograron sobrevivir en el largo plazo. Esto sugiere que la distancia respecto del Estado centralizado pesa en la dinámica de los movimientos sociales y que acortar esa distancia es una determinante importante para su éxito.

derar seriamente el espacio, es importante para empezar a entender el carácter y la naturaleza, así como la probabilidad de éxito del activismo de los movimientos sociales. Por supuesto, preocuparnos por esta dinámica es empezar a superar algunas de las preocupaciones de los teóricos de los nuevos movimientos sociales. Como Joe Foweraker (1995:2) nos recuerda en su amplia y admirable revisión de la teoría de los movimientos sociales, los teóricos de influencia europea están menos interesados en saber por qué los movimientos tienen éxito y están más preocupados por su significado y su gran impacto en la democratización, a diferencia de sus contrapartes estadounidenses, que se interesan más en la movilización de recursos y el proceso político. Pero aún para el significado y el impacto sobre la democratización, la localización de los movimientos puede ser de importancia crítica.

En la literatura sobre los movimientos sociales y la democratización, por ejemplo, una cantidad notablemente grande de los movimientos que los académicos consideran importantes en la creación de culturas políticas democráticas o en las transiciones hacia la democracia son de hecho movimientos sociales urbanos localizados en las ciudades más grandes de América Latina: Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y Lima (Mainwaring, 1987; Sla-

ter, 1985; Mainwaring y Viola, 1984). Además, muchos de los movimientos considerados por los académicos como ejemplares en el contexto de los "nuevos" movimientos sociales son también generalmente urbanos y están organizados por colonias en torno a demandas de servicios. De hecho, en el conjunto de la literatura de los nuevos movimientos sociales la evidencia sugiere que los movimientos sociales rurales son escasos e infrecuentes, al menos en comparación con los movimientos urbanos. Con todo, si lo que importara fuera solo el momento (*i.e.* posmodernidad), el peso del Estado Leviatán, o la ausencia de estructuras y prácticas democráticas, deberíamos esperar ver al menos un número igual de movimientos o quizá más en las áreas rurales debido a que en ellas se sufre mayor represión y exclusión política. El espacio urbano, entonces, es en realidad muy importante para lo que los académicos de los movimientos sociales, especialmente los de los nuevos movimientos sociales, argumentan. Sin embargo, este importante hecho casi no es teorizado como significativo por los teóricos de los enfoques EOP y NMS, a pesar de su obvia relevancia. En el mejor de los casos, los teóricos de ambos enfoques permanecen relativamente silenciosos frente a movimientos nítidamente urbanos y a sus diferencias específicas con otros movimientos; silenciosos al menos en la medida en que tienden a ignorar teórica y analíticamente la localización y la racionalidad urbana de dichos movimientos, a los que tratan simplemente como movimientos sociales en términos generales.¹⁶

Al enfocar las diferencias entre los espacios urbanos y los de otro tipo no estoy tratando de resucitar ciegamente la obra de Manuel Castells (1984), aunque creo que se le ha propinado un gran demérito por los teóricos de los movimientos sociales que han ignorado largamente sus contribuciones teóri-

16. Scott Mainwaring (1987:133), por ejemplo, define los movimientos urbanos meramente como "un subconjunto de movimientos sociales", esto es, "movimientos de gente pobre que se desarrollan en áreas urbanas pero que son diferentes al movimiento laboral" (p. 133). Mainwaring reconoce que las diferencias provienen de que el foco de los movimientos urbanos está en la esfera de la reproducción, no en la de la producción; sin embargo, esta diferencia no cumple ninguna función en la teorización ulterior del autor sobre el impacto político y los límites de dichos movimientos. Lo que le importa en primer lugar, en realidad, es subrayar su fragmentación y las bases culturales de la formación de su identidad social.

cas y empíricas pioneras y todavía significativas al estudio de los movimientos sociales, la democratización, las clases y la cultura en América Latina y otras partes. Pero mi propósito no es argumentar a favor de una comprensión general de lo urbano, como lo hace Castells, o analizar cómo su noción de consumo colectivo nos puede servir para comprender los movimientos sociales y su enorme impacto en la política y la sociedad en América Latina. En lugar de eso, lo que estoy haciendo aquí es introducir el *concepto de espacio y lenguajes del espacio* al estudio de los movimientos sociales y, en particular, proponer la noción de *distancia* como punto de partida para teorizar la naturaleza de las relaciones entre ciudadanos y Estado y cómo esto impulsa los movimientos sociales en América Latina.

Hasta cierto punto, el reconocimiento del espacio está presente en una veta de la literatura que examina la movilización social y el desarrollo político. Estoy pensando en el considerable cúmulo de trabajo producido o inspirado por Stein Rokkan sobre los partidos y los sistemas políticos, el cual está repleto de discusiones sobre las relaciones centro-periferia y que usa un extenso léxico de inclusión y exclusión que, entre otras cosas, refiere a lo espacial.¹⁷ Sin embargo, este lenguaje conceptual y su significado exacto no han sido integrados sistemáticamente en los estudios contemporáneos de los movimientos sociales, salvo por varios proponentes del enfoque EOP al explicar las bases sobre las que se organizó la política de “viejo” estilo, las cuales crearon espacio (u oportunidades) para la emergencia de movimientos sociales (Kriesi, et. al., 1995:19). Esto es, si el lenguaje del espacio y la distancia cuenta para los teóricos contemporáneos de los movimientos sociales, éstos son los teóricos vinculados al enfoque EOP, y se le ha usado para estudiar el contexto político tradicional o “viejo”

de movimientos organizados al amparo de los partidos políticos y el Estado, no así el carácter y el potencial de los movimientos sociales contemporáneos. Por esta razón, la manera en que los teóricos del enfoque EOP consideran el espacio no es la misma que la que yo tengo en mente porque el concepto para ellos es parte de una comprensión más amplia e históricamente determinada de la política de los partidos europeos, la que se identifica como parte de un periodo más antiguo. Para mí, los lenguajes y conceptos de espacio son útiles para entender tanto los llamados “nuevos” movimientos sociales como los viejos, en el presente y no solo en el pasado.

Al introducir la noción de distancia respecto del Estado me propongo hablar de lo que Robert Merton llamaría silencios teóricos de los analistas de los movimientos sociales, que consideran las actividades de tales movimientos en las ciudades para plantear grandes demandas, al tiempo que ignoran conspicuamente las implicaciones teóricas de esas dinámicas territoriales o espaciales. También espero encuadrar simultáneamente los dominios estatal y societal debido a que la distancia es por definición y en mi propio concepto una noción relacional que nos puede ayudar a comprender la diversidad de conexiones entre los ciudadanos (i. e. sociedad civil) y el Estado, así como la forma en que esas conexiones o la ausencia de ellas dan vida y sentido a los movimientos sociales, al mismo tiempo que nos ofrecen una estructura para estudiarlos. Finalmente, me propongo plantear la singularidad de los procesos históricos de la formación del Estado

17. Una amplia revisión de las contribuciones de Rokkan y su influencia en el trabajo ulterior en *Mobilization, Center-Periphery Structures and Nation-building* (Tosvik, 1981).

en América Latina como crucial para el estudio de los movimientos sociales.

El examen detenido de la formación del Estado y cómo este proceso aleja a ciertas poblaciones de las instituciones, en las prácticas y en la vida misma del Estado nacional, así como atrae a otras hacia su órbita, nos ayuda a entender mejor las relaciones únicas entre las esferas pública y privada y entre la sociedad civil y el Estado en América Latina. Todo esto, a la vez, nos ayuda a comprender el significado y carácter de los movimientos sociales, tanto su así llamada novedad como su anacronismo, así como su papel potencial en la democratización y su gran difusión entre ciertas poblaciones de América Latina.

Teorizar la distancia

El concepto de distancia que empleo aquí no es solo geográfico, también puede ser entendido en términos institucionales, culturales y de clase. Las poblaciones pueden estar distanciadas de las instituciones, las prácticas, las políticas, los procedimientos e incluso los discursos del Estado en cualquiera de estas cuatro acepciones o más. Y es la distancia de los ciudadanos respecto del Estado en conjunto lo que, sociológicamente hablando, debemos tomar en cuenta al analizar la emergencia de los movimientos sociales, las estrategias que persiguen, las identidades que adoptan y su impacto sobre la política y la sociedad. Mi propósito es teorizar a partir de las contribuciones de la literatura existente sobre geografía política, espacio y semiótica, así como de la antropología cultural representada hoy por la

obra de Peter Taylor, John Agnew, David Harvey, Mark Gottdiener, Edward Soja, Sarah Radcliffe y Sallie Westwood, buscando ir más allá.

Cuando me refiero al Estado tengo en mente la definición que Joel Migdal extrae de Max Weber: "organización compuesta de numerosas dependencias dirigidas y coordinadas por el liderato del Estado (poder ejecutivo) que tiene la capacidad o autoridad de crear e implementar leyes obligatorias para toda la población, así como de establecer los parámetros de creación de leyes para otras organizaciones sociales en un territorio determinado, usando la fuerza para ello en caso de ser necesario" (1988:19). No me refiero únicamente a instituciones gubernamentales nacionales de alto perfil y administrativamente poderosas que muchos académicos tienen en mente cuando hablan de los estados latinoamericanos, ni siquiera a instituciones nacionales como el ejército que controlan los medios de coerción, sino más ampliamente a la gran variedad de instituciones y agencias de gobierno, creación de políticas e implementación de las mismas, algunas de las cuales pueden ser totalmente menores, pero que tienen impacto en la vida y los medios de vida de los ciudadanos. En este sentido, incluyo en la definición a otros actores e instituciones que crean y llevan a cabo leyes y políticas como los partidos y parlamentos, no solo a los burocratas.¹⁸

Para referirse a esta diversidad de actividades, algunos académicos usan el término comunidad política; prefiero el concepto de Estado no solo porque es el que usan los teóricos de los enfoques EOP y NMS, sino porque abarca las dimensiones procedimentales, institucionales y normativas de gobierno, así como los resultados de las políticas, los que frecuentemente (aunque no en modo exclusivo) son causa de la movilización ciudadana. Prefiero

18. En este punto tomo en cuenta la brillante demostración de O' Donnell (1973) en el sentido de que la posibilidad de que los partidos o los parlamentos tengan poder sustantivo de gobierno depende del tiempo y lugar, incluyendo la historia y la naturaleza del desarrollo económico.

ro el concepto de Estado pues es diferente del concepto de régimen, distinción importante y absolutamente necesaria, que a menudo se pierde en la literatura sobre los movimientos sociales de América Latina. Los ciudadanos pueden aborrecer al régimen en el poder, o sentir que un régimen o gobierno particular se ha extralimitado y así repudiarlo. Pero con algunas claras excepciones, esto no significa que los ciudadanos automáticamente objeten la idea misma de Estado, incluso cuando se organizan en torno a identidades sociales autónomas.¹⁹ En efecto, el supuesto normativo según el cual los estados modernos tienen el propósito principal de habilitar y proteger a los ciudadanos ha ganado un sorprendente apoyo entre los ciudadanos de países de desarrollo tardío, incluso entre la gente marginada más proclive a luchar contra los regímenes en el poder (Herzfeld, 1997:2).²⁰

Al reflexionar sobre la distancia de los ciudadanos respecto del Estado como punto de partida del estudio de los movimientos sociales en América Latina, comparto algunas de las preocupaciones sobre la formación del Estado, los límites de la sociedad civil y el ascenso de la esfera pública; problemas que han llamado la atención de muchos de los principales teóricos sociales europeos como Jürgen Habermas, Carl Schmidt y Hannah Arendt, y más recientemente Jean Cohen y Andrew Arato. Estos académicos se propusieron entender las articulaciones históricas entre el Estado y la sociedad (generalmente definidos como esfera pública y sociedad civil) y cómo y por qué han cambiado a lo largo del tiempo. Este es también mi propósito, aunque tal vez a partir de supuestos diferentes. Más aún, de manera similar a la de los académicos estadounidenses del enfoque EOP, yo veo necesario entender el poder y las estructuras políticas del Estado para entender las acciones colectivas de los ciudadanos. Sin embargo, mi estruc-

tura difiere en varios aspectos importantes, lo cual exige una mayor explicación.

Primero, en vez de considerar al Estado y la sociedad como dos dominios homogéneos y diferentes a ser conceptualizados como opuestos entre sí, adopto un enfoque diferenciado, principalmente porque en el contexto latinoamericano el Estado presenta un desarrollo disparejo y fragmentado, y a veces transversal en relación con la sociedad, la cual, a su vez, se presenta también diferenciada en aspectos cruciales. Es por esta razón que, de hecho, prefiero analizar la distancia de los ciudadanos respecto del Estado en cuatro dimensiones diferentes (geográfica, institucional, de clase y cultural) que pueden proporcionarnos una comprensión *de conjunto* más precisa y matizada del Estado y la sociedad. A excepción de la dimensión de clase, el resto de estas dimensiones no habían sido identificadas como analíticamente centrales —al menos en estos términos— en ninguno de los enfoques a que nos hemos referido, aunque éstos no son indiferentes a las cuestiones de organización del Estado, parlamentarismo, constitucionalismo, público instruido, la así llamada esfera política pública y/o la economía, asuntos que, por otra parte, varios teóricos sociales han planteado ya. Segundo, a diferencia de los teóricos que examinan las relaciones cambiantes Estado-sociales en términos de un solo factor, ya sea institucional, cultural o de clase, considero que las relaciones *entre* estas cuatro dimensiones son tan importantes como cualquiera de ellas en particular para entender la distancia de los ciudadanos respecto del Estado. Tercer-

19. Irónicamente, esta idea encuentra, tal vez, más aceptación en la ciudadanía y los movimientos sociales de Estados Unidos, cuya historia de antiestatismo y cultura política imponen límites más estrictos que los de América Latina y Europa a la intervención del Estado.

20. Una interesante discusión de esta paradoja está en Herzfeld (1997).

ro, en vez de preocuparme por dónde trazar la línea teórica divisoria entre el Estado y la sociedad, o entre el Estado y la esfera pública, o incluso entre la esfera política y el Estado, empiezo por asumir que estas distinciones son abierta y altamente disputadas en el mundo "real" de América Latina en razón de la historia y el papel de los movimientos sociales en el desafío, la disputa y la superación de estos dominios.

Causas de la distancia

Geográficas

La historia del desarrollo político y económico de América Latina pone de manifiesto que una de las causas más duraderas y conflictivas de la distancia de los ciudadanos respecto de las prácticas, las hazañas y la participación en el Estado es de origen geográfico. La mayoría de los estados nacionales en América Latina, por lo general, se basan en aparatos administrativos altamente centralizados, y esta centralización presenta dimensiones espaciales e institucionales. Respecto de la primera, la sede del gobierno es por lo general una gran ciudad capital dotada de actividades, recursos, significado semiótico y centralidad política que la distinguen del resto (Smith, 1986:182; ver también Davis, 1994). En estas ciudades capitales, los movimientos tienen un acceso simbólico y sustantivo al Estado de manera tal que puede influir en su estrategia y acciones, así como en la forma de respuesta del Estado mismo. Sin embargo, al considerar la distancia geográfica no basta saber dónde se localizan los ciudadanos y los movimientos sociales, *i. e.*, áreas rurales vs. áreas urbanas, pueblos grandes o pequeños, ciudades capitales o provincias. El conjunto geográfico de una nación también importa de sobremanera, incluyendo la cuestión de si grandes segmentos de la población están cerca o lejos del asiento del gobierno

y/o el sitio donde se localizan las principales instituciones del Estado.

Que hay algún tipo de relación entre localización y el carácter de los movimientos resulta claro si se examinan detenidamente las diferencias entre los movimientos urbanos y rurales como aludimos antes. Los movimientos urbanos presentan, por lo general, demandas menos radicales y se muestran más inclinados a la negociación y la conciliación, rasgo que los teóricos de los nuevos movimientos sociales podrían identificar como rechazo a la identidad o al radicalismo de clase. Y en una nación altamente centralizada y grande, los movimientos urbanos en la capital tienden a plantear demandas más moderadas. En contraste, a los movimientos en regiones distantes de la capital frecuentemente se les niega el mismo acceso al Estado, debido en gran parte a que están geográficamente separados o aislados. Estos están, para decirlo así, más distanciados del Estado, y puede ser precisamente por esta razón que los movimientos sociales más radicales en América Latina prosperan en las áreas distantes y aisladas de las ciudades capitales (Wickham-Crowley, 1992). En efecto, la evidencia sugiere que una característica de los movimientos sociales que tienden a rechazar o a mostrarse desfavorables a comprometerse con el Estado tienen sus raíces en regiones o localidades distantes del asiento geográfico del Estado nacional.

Los casos de los movimientos rebeldes de Sendero Luminoso y Tupac Amaru en Perú, y Antorcha Campesina, los zapatistas (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (ERP) vienen inmediatamente a la mente, si bien algunos movimientos sociales menos radicales pero decididamente opositores y altamente visibles como El Barzón y el movimiento Navista en México también provienen de provincias distantes. Estos movimientos surgieron en lugares

geográficamente distantes —si no aislados— del centro político, social y económico de la nación, Lima y la ciudad de México en estos casos. Es sorprendente que Perú y México, países conocidos por las diferencias espaciales más extremas entre el centro y la “periferia”, han tenido a muchos de los movimientos sociales más radicales de América Latina. Parece haber una relación entre el aislamiento o la distancia territorial y el radicalismo de los movimientos sociales, al menos así es en el caso de Sendero Luminoso y un poco menos en el de los zapatistas. Esto contrasta con el activismo de los movimientos sociales en las ciudades capitales de estos países, donde es menos probable que surjan u obtengan apoyo movimientos estilo guerrilla o fuertemente opositores. Muchos teóricos de los movimientos sociales o de otro tipo han preferido entender estos movimientos en términos de valores y cultura, asociados con el contenido de clase o la modernización (o su antinomia, el atraso). Pero al hacerlo así se muestran incapaces de reconocer que el espacio, especialmente la distancia de las instituciones, prácticas y proyectos del Estado nacional, también juega su parte.

Hay que desarrollar y reformular las nociones de regiones avanzadas y atrasadas de Goffman para entender esta situación. De acuerdo con Anthony Giddens, el concepto de regiones de Goffman alude a áreas físicas “que difieren en términos de su confinamiento o demarcación, así como en términos de qué características de presencia podrían ‘dejar pasar’” (Cassell, 1993:182). En una explicación más amplia, Giddens pone el ejemplo de una mampara de vidrio grueso en un estudio de radio que sirve para aislar auditiva pero no visualmente un cuarto. Las regiones, en breve, pueden ser distinguidas de varias maneras, como lo sugiere mi noción cuádruple de distancia, si bien a menudo se

les distingue también en términos de uso y, más relevante para nuestros propósitos, en términos de relaciones sociales. En particular, las regiones atrasadas difieren de las avanzadas en que ciertas formas de interacción social “están ausentes o escondidas”.²¹ En muchos sentidos, este argumento se corresponde con los planteamientos de geógrafos británicos que han demostrado que los ciudadanos de poblaciones de diferente tamaño tienden a establecer relaciones diferentes con la autoridad política, condición que cuenta para las formas y patrones de protesta (Less, 1982).²²

Con base en estas ideas de espacio y distancia respecto de las autoridades políticas del Estado nacional es posible pensar las regiones avanzadas y atrasadas de Perú y México, especialmente si analizamos cada historia regional en relación con la historia nacional de la formación del Estado. Por las prácticas pretéritas económicas y políticas del Estado, para no hablar de los patrones administrativos del gobierno colonial español, las provincias “atrasadas” de Ayacucho y Chiapas, por ejemplo, fueron tenidas como institucionalmente aisladas, circunstancia que reforzó —y fue reforzada por— su ubicación en remotas regiones montañosas a las que es muy difícil acceder. En este sentido, Ayacucho y Chiapas son notoriamente diferentes de las localidades centrales de Lima y la ciudad de México

21. “La actuación en las regiones avanzadas típicamente supone esfuerzos para crear y sostener la apariencia de conformidad con las reglas respecto de las cuales los actores pueden ser indiferentes e incluso positivamente hostiles cuando discuten solo entre ellos. La existencia de discriminaciones avanzadas/atrasadas normalmente indica una penetración discursiva sustantiva de las formas institucionales en las que transcurre la interacción.” (Cassells, 1983:182).

22. Los geógrafos británicos han llevado desde hace tiempo la delantera en el análisis del espacio y la política. Más información sobre esto en John R. Short (1982) y Peter J. Taylor (1989).

no solo en términos del grado de distancia espacial, sino también de niveles de explotación, pobreza y aislamiento de las normas y procedimientos políticos establecidos nacionalmente, incluyendo la represión violenta y el terror, prácticas que si bien pueden ocurrir frecuentemente, no son reconocidas como componentes legítimos del derecho político del Estado gobernante. Además, las diferencias de procedimiento y prácticas, especialmente el punto de partida de las normas políticas establecidas, a menudo son deliberadamente disimuladas frente a las poblaciones de las localidades centrales, práctica que fomenta la oposición local y que permite al Estado responder duramente a esos movimientos.

Para mí, el atractivo de la idea de regiones avanzadas y atrasadas estriba en que concentra nuestra atención en algo más que las meras diferencias de espacio, la exclusión y el aislamiento. En efecto, las poblaciones pueden ser relegadas a la condición de regiones "atrasadas", para usar la nomenclatura de Goffman, o distanciadas del Estado, para usar mi propia fraseología, en términos institucionales, culturales, de clase y geográficos. Además, como veremos, estas formas de distancia a menudo se presentan juntas, así como la distancia está vinculada no solo a los medios a través de los cuales los estados consolidan bajo su férula grandes territorios, sino también a los procesos institucionales de formación del Estado y las clases, los cuales tienen por sí mismos una lógica espacial.

Institucionales

Una segunda manera en que podemos entender la distancia de los ciudadanos respecto del Estado y cómo esto influye en las actividades de los movimientos sociales es enfocando las instituciones formales de gobierno. Ya que los estados lati-

noamericanos modernos están altamente centralizados a causa de los patrones de colonialismo, mercantilismo, guerra y, más recientemente, a los procesos de urbanización impulsados por la industrialización, el poder político está altamente concentrado en las instituciones del Estado nacional, principalmente en el poder ejecutivo si es que no en la persona del presidente directamente. Esto no solo significa que la mayoría de las decisiones políticas sean tomadas en las oficinas del presidente y de su gabinete nacional, o en instituciones altamente burocratizadas que están muy distantes de la vida diaria de los ciudadanos; significa también que el poder de las estructuras intermedias del Estado, incluyendo al congreso nacional o parlamento, tienden a estar claramente circunscritas (O'Donnell, 1973). Más importante aún, significa que las estructuras políticas locales, o las instituciones más próximas a los ciudadanos, tanto en el sentido burocrático como espacial, carecen casi por completo de poder.

En consecuencia, la mayoría de los ciudadanos en América Latina vive considerablemente distanciada de las instituciones, los procedimientos y las prácticas de creación de políticas formalmente sancionadas por el Estado, principalmente porque las instituciones de gobierno y creación de políticas son nacionales, no locales. Y precisamente debido a que el Estado es tan institucionalmente inaccesible y distante de los ciudadanos, y a que está organizado para responder a los actores y problemas nacionales más que a los asuntos de la vida diaria de las comunidades y municipios, es que muchos ciudadanos se organizan en movimientos sociales para manifestar sus preferencias políticas y/o plantear demandas al Estado. Lo que intentan es cerrar la brecha institucional entre los ciudadanos y el Estado, por así decirlo, a fin de acercar las instituciones

a los ciudadanos.²³ Esto tiene importantes implicaciones para la teorización de los movimientos sociales, ya que sugiere que un gran número de éstos en América Latina podrían estar tratando de cerrar esa distancia, no de abrirla, como los teóricos de los nuevos movimientos sociales sugieren. Lejos de tratar de una distancia social o institucional mayor entre ellos y el Estado colonizador del tiempo de vida, como los intérpretes de Habermas podrían argumentar, lo que buscan es mayor proximidad o acceso a las instituciones formales de gobierno. Después de todo, al demandar mayor conexión con las instituciones y las prácticas de creación de políticas, los ciudadanos participan y usan las instituciones para sus propios propósitos.²⁴

Obviamente, esto no significa que las organizaciones locales de los movimientos sociales estén deseosas de invitar a las instituciones corruptas del Estado, o a los políticos, a que participen en su vida cotidiana. En este punto es importante subrayar la diferencia entre Estado y régimen, y recordar al lector que nuestra comprensión del Estado y de los esfuerzos de los ciudadanos por cerrar la distancia se basa principalmente en el entendimiento del ideal normativo del Estado. Para la mayoría de los ciudadanos en América Latina este ideal implica instituciones procedimentales y representativas, sin ignorar que puede haber desacuerdo sobre el tipo de insti-

tuciones (delegativas o directamente democráticas, por ejemplo) y sobre el contexto político económico amplio en el que deben estar basadas. En consecuencia, los esfuerzos de los movimientos sociales en el mundo real para cerrar la distancia institucional también pueden ser vistos como esfuerzos para la construcción de la democracia o para crear mayores conexiones entre los ciudadanos y el Estado mediante la apertura de nuevos canales o mecanismos de participación.

Esto tampoco quiere decir que esos movimientos u organizaciones locales no valoren su autonomía o el uso del lenguaje y/o de las estrategias autonomistas para plantear demandas al Estado. Un ejemplo de esto puede apreciarse en el estudio de Vivienne Bennett sobre los movimientos sociales organizados en torno a la demanda de agua en Monterrey, México. Bennett argumenta que, entre otras cosas, las vecindades se organizaron en respuesta a "las condiciones de vida infrahumanas y a *la falta de mecanismos institucionales efectivos para procesar las demandas y resolver los problemas urbanos*" (énfasis nuestro); y al tiempo sugiere que esto motivó a los residentes a "desarrollar su propio discurso y sus propios canales de comunicación", Bennett subraya que uno de los propósitos principales de la protesta fue obligar al gobierno a proveer un adecuado servicio de agua (Bennett,

23. Es importante subrayar que cuando hablo de distancia (o proximidad) respecto del Estado estoy hablando en términos *institucionales*, no en sentido físico. En muchos países latinoamericanos los gobiernos reprimen o aterrorizan físicamente a los ciudadanos, de tal modo que en este sentido habría poca "distancia" física. Pero la represión armada o física no entra precisamente en ninguna de las cuatro categorías de distancia o proximidad que he propuesto aquí. Las poblaciones más distantes del Estado en términos geográficos, institucionales, de clase y culturales son las más expuestas a la represión violenta debido a que son vistas y tratadas como si estuvieran

fuera del contrato social formal entre los ciudadanos y el Estado.

24. Incluso Habermas es consciente de esta dinámica. El observa que "el estado debe [...] proveer las garantías positivas y materiales de la participación en términos de nuevos derechos sociales [...] Mientras que los derechos negativos como las 'libertades' se preservan en las constituciones de los estados de bienestar, ahora debemos verlos como *derechos de participación en términos de derechos sociales positivos a las actividades del estado* en vez de verlos como formas de auto-defensa y auto-diferenciación respecto del Estado." (cfr. Cohen y Arato, 1995:250).

1995:104). Esto es, a través de su organización y sus protestas, los ciudadanos estaban tratando de obtener los beneficios que las instituciones no les podían proveer, de aquí su argumento de que las "protestas habían sobrepasado los canales gubernamentales simplemente porque esos canales no existían" (Bennett, 1995:105). Sin embargo, en el proceso estos ciudadanos organizados colectivamente lograron cerrar la brecha con las instituciones existentes del Estado, contribuyendo así a crear nuevas instituciones y prácticas, las cuales, según muestra Bennett, proporcionaron el servicio de agua más accesiblemente en lo sucesivo.

Todo esto nos ayuda a entender por qué muchos de los movimientos sociales más comunes y notorios en América Latina son movimientos urbanos de vecindad, colonia y barrio que plantean al Estado demandas de suministro de servicios en la ciudad. Pues los residentes de las comunidades urbanas frecuentemente carecen de las estructuras básicas de participación política en la ciudad o en la colonia, cuentan con poco acceso formal al Estado. Por eso a menudo se organizan en movimientos sociales a través de los cuales plantean demandas de servicios y envían el mensaje de que las instituciones políticas del Estado no están operando a nivel de la comunidad, la colonia o el barrio. Al proceder así, tienden a cerrar la brecha institucional con el Estado.

De nuevo, es importante recordar que la experiencia latinoamericana de formación del Estado contrasta fuertemente con la experiencia de Estados Unidos, circunstancia que tiene implicaciones teóricas cruciales. En los Estados Unidos, como Tocqueville nos recuerda, las estructuras políticas locales eran poderosas y mucho más adecuadas que el Estado nacional como fuentes legítimas de poder debido a que las prácticas y procedimientos

comunitarios de gobierno en los pueblos pequeños fueron la base original de la autoridad política. El Estado fue dotado de poder local primero, y luego de poder nacional, y los remanentes ideológicos de este ideal de descentralización permanecen hasta hoy, y son permanentemente debatidos en el discurso del federalismo. Por supuesto, gracias al crecimiento y a la burocratización de las estructuras administrativas, los estados de todas partes se han ido distanciando de la ciudadanía. Estados Unidos no es la excepción, pero las estructuras y las prácticas políticas locales conservan ahí una fuerza sorprendente, y la mayoría de los ciudadanos estadounidenses consideran que los gobiernos locales son mucho más responsivos que el gobierno nacional. En la vida diaria, entonces, los ciudadanos estadounidenses sienten al gobierno local menos extraño. Y es precisamente por esta razón que en Estados Unidos hemos visto pocos movimientos sociales urbanos, y solo llegan a emerger en las grandes ciudades que tienen gobiernos altamente burocratizados que *de facto* se han distanciado de las demandas de la comunidad local aunque estén obligados a responder *de jure*.

La situación en Europa es un poco diferente a la de Estados Unidos en el sentido de que los estados nacionales están mucho más centralizados, y las estructuras políticas locales no están muy consolidadas. Sin embargo, el tamaño más pequeño de los países europeos y la amplia cobertura de los estados de bienestar reducen la distancia entre los ciudadanos y éste, lo que los hace más parecidos a los Estados Unidos que a los de América Latina en este aspecto. A diferencia de Latinoamérica, en Europa una gran cantidad de ciudadanos tiene acceso institucional al Estado de bienestar redistributivo y a sus ventajas, de tal modo que

experimentan las regulaciones y las instituciones estatales en su vida diaria. No es sorprendente, entonces, como han subrayado los teóricos de los nuevos movimientos sociales, que los ciudadanos que se organizan en movimientos sociales en Europa busquen mayor distancia (o autonomía, como dirían los teóricos de los NMS) de las instituciones y prácticas del Estado, ya que la “cercanía” obviamente no ha satisfecho la totalidad de sus aspiraciones personales. En América Latina, en contraste, la distancia parece ser la culpable, además del hecho de que los estados funcionan más a nivel nacional que local. Un acceso más local a las instituciones formales de gobierno es algo que los movimientos sociales generalmente desean.

Debemos recordar, no obstante, que no todos los latinoamericanos están igualmente distantes, institucionalmente hablando, de las prácticas y procedimientos de gobierno del Estado. El espacio geográfico también cuenta, especialmente en cuanto a que las poblaciones de determinadas partes pueden estar más o menos institucionalmente relacionadas, precisamente en razón de los procesos altamente centralizados de la formación del Estado. Como Giddens nos recuerda, siguiendo tal vez el trabajo de Weber sobre las ciudades y la formación del Estado, así como la noción de Goffman sobre las regiones, las ciudades “son los principales intermediarios locales entre los de disponibilidad de corto plazo [léase: individuos en contacto frente a frente o colectivo] y el Estado nacional.” (Cassell, 1993:184). Uno supone que esto debe ser así con mayor fuerza en las ciudades capitales por el predominio de las instituciones del Estado nacional, y menos decisivamente en ciudades pequeñas localizadas en áreas remotas. Y son los ciudadanos asentados fuera de las ciudades los que, generalmente hablando, están menos relacionados con el Estado

y sus instituciones formales de gobierno. Esto es especialmente cierto en regímenes políticos altamente centralizados como los que vemos en América Latina. Hace mucho Tocqueville argumentó que solo con “la descentralización del poder político y económico” los ciudadanos tienen las “oportunidades [...] (de) ser agentes efectivos” en la comunidad política mayor (Tocqueville *cfr.* García, 1996:15). En ausencia de esa descentralización, una proporción extraordinariamente grande de latinoamericanos se encuentra alejada de las instituciones del Estado y, de esa manera, distante de las oportunidades formalmente sancionadas de practicar la ciudadanía.²⁵

Por otra parte, incluso en el caso en que en todos los municipios de un país existieran las mismas instituciones formales de gobierno, los ciudadanos de ciertas localidades, al estar fuera del alcance de la mirada de otros, o contar solo con un limitado acceso a las instituciones del Estado, se conducirían, por así decirlo, con reglas distintas. De nuevo, Giddens nos recuerda que “los habitantes de los barrios pobres de una ciudad, por ejemplo, pueden estar ‘alejados’ del patrón espacio-tiempo que siguen otros que usan la ciudad pero que no viven en ella.” (Cassell, 1993:184). En la medida en que en esas regiones ‘atrasadas’ observemos diferentes procedimientos políticos y

25. La relación entre la distancia institucional y espacial no es necesariamente directa. En algunos países, las regiones fronterizas, por ejemplo, aunque distantes del Estado central, estarán más integradas institucionalmente debido a consideraciones de defensa o seguridad nacional. Esto sería particularmente cierto para países latinoamericanos con larga historia de escaramuzas fronterizas. Así veríamos también una historia de represión y mano dura, precisamente por las incertidumbres fronterizas, lo que a su vez incrementaría el sentido de distancia del Estado. Esto no significa asumir que ciertas formas de distancia o proximidad se agruparán nitidamente.

prácticas institucionales que las de las regiones avanzadas, no debería sorprendernos que los ciudadanos de unas y otras practiquen diversas maneras de desafiar al Estado y de hacer política. Los ciudadanos de las así llamadas regiones avanzadas estarán más inclinados a participar en los procesos electorales, mientras que los de las "regiones atrasadas" se inclinarán a tomar la ruta de los movimientos sociales; justo así como aquellos ciudadanos de las regiones 'avanzadas' que participan en movimientos sociales a menudo prefieren la negociación y el arreglo institucional frente a la protesta y la rebelión, estrategia frecuentemente vista en regiones 'atrasadas' distantes.

Clase

El ejemplo de los barrios pobres pone de manifiesto un tercer factor para evaluar la distancia ciudadana respecto del Estado: el *status* de clase o económico. Mientras que por un lado puede haber algunos patrones espaciales e institucionales generales que incrementen la distancia entre los ciudadanos y los procedimientos y prácticas del Estado, el *status* económico o de clase (desde la pobreza extrema hasta la riqueza) a menudo cruza transversalmente esos patrones y determina que ciertas poblaciones estén más o menos distanciadas, aun si viven en la misma ciudad. En cualquier ciudad o pueblo, sea o no ciudad capital, algunas clases o segmentos están, por así decirlo, más distanciados del Estado que otros. Los residentes de las comunidades pobres a menudo carecen de las relaciones, educación y fuerza política para hacer que el Estado descienda, por así decirlo, al nivel de la comunidad. Los residentes ricos, en cambio, por lo general cuentan con los medios para tener los servicios del Estado a través de prácticas, políticas y procedimientos formales o informales. Las diferencias de *status*

económico o de clase, a menudo influyen a través de los espacios urbano y rural. En muchas áreas rurales de América Latina vemos una alta concentración de pobres, situación contextual que puede reforzar la distancia institucional de una localidad respecto del Estado. Por supuesto, todo depende de la naturaleza de la actividad económica. Las áreas rurales con campesinos y agricultores poseedores de tierra difieren de las dominadas por grandes terratenientes, y las relaciones institucionales que estos diferentes grupos establecen con el Estado son también diferentes.

Por supuesto, estas diferencias no son obvias ni inamovibles. En todo caso, la cuestión importante a tener en cuenta es que, en relación con el *status* económico o de clase, no siempre es fácil distinguir los patrones de distanciamiento individual o comunitario de las estructuras y prácticas institucionales del Estado, tomando en cuenta exclusivamente la adscripción de clase. Por ejemplo, las comunidades urbanas pobres pueden tener una historia de relaciones con los actores o las instituciones del Estado que les de conocimiento, redes y los medios políticos (forjados tal vez a través de relaciones institucionales informales creadas en movilizaciones pasadas) que reduzca la distancia del Estado, incluso más que comunidades de mayor nivel económico. En este sentido, las áreas nuevas ilegalmente invadidas, por ejemplo, pueden estar institucionalmente más distantes que las comunidades más viejas y establecidas, igualmente pobres pero que han negociado con las autoridades por servicios desde tiempo atrás. Además, el hecho de que estas últimas estén localizadas en el centro de las ciudades y las primeras en la periferia añade una dimensión espacial a la de por sí estratificada y compleja noción de distancia. Adicionalmente, algunas comunidades, aunque pobres, pueden contar con una

alta concentración de determinadas actividades económicas, como trabajadores del sector informal o autoempleados, que pueden estar menos inclinados a tener relaciones institucionales con el Estado en comparación con comunidades habitadas por obreros de fábrica. Los obreros industriales en América Latina tienden a figurar entre los grupos mejor organizados e incorporados a las estructuras políticas del Estado; muestran por lo general una mayor identificación o cuentan con mayor acceso a éste que los obreros no organizados del sector informal; y esto puede reflejarse espacialmente en ciertas comunidades.

Aun así, puede haber variaciones dentro de estos mismos patrones. En muchas ciudades grandes de América Latina —Lima y México son solo dos ejemplos— los gobiernos locales están desarrollando nuevas prácticas y procedimientos que los ponen en contacto permanente con ciertos segmentos de población locales, como los vendedores callejeros y otros trabajadores del sector informal, así sea solo para colaborar en el funcionamiento de la creciente anarquía de esas ciudades. En estos lugares, las personas empleadas en esas ocupaciones pueden estar más inclinadas a acudir directamente al Estado y sus instituciones que a unirse a movimientos sociales, mientras que en ciudades donde esos vínculos son inexistentes, las personas ocupadas en actividades similares tenderían a hacer lo opuesto. Y los procesos de formación del Estado, particularmente los referentes a las diferencias entre las instituciones de gobierno locales y nacionales, pueden influir en esta dinámica. Por ejemplo, en la medida en que los vendedores callejeros y los trabajadores del sector informal están más inclinados a establecer relaciones con el así llamado Estado local, mientras los obreros industriales están más inclinados a establecer relaciones con el Estado nacional, estos

últimos pueden sentirse mucho más distanciados del Estado que los primeros, aún en el caso en que la respuesta de éste sea similar.

Esta distancia, además, puede estar relacionada con asuntos específicos. Por ejemplo, en las demandas de salarios y condiciones de trabajo, los obreros industriales pueden tener los vínculos institucionales necesarios que mantengan su lealtad con el Estado, pero en términos de demandas de vivienda, servicios y otras necesidades básicas, pueden sentirse más distantes y, en ese sentido, más inclinados a unirse a movimientos sociales. En este sentido podemos explicarnos que los obreros industriales se muestren a menudo más inclinados a participar en movimientos de comunidad o urbanos para plantear demandas, aunque acudan a estructuras y prácticas del Estado más formales para expresar demandas relacionadas con el lugar de trabajo.

Históricamente hablando, el hecho de que algunas clases, comunidades u ocupaciones en América Latina estén menos inclinadas a integrarse institucionalmente a las estructuras del Estado nos ayuda entender quién y por qué se une a los movimientos sociales. Como Lucio Kowarick lo dijo alguna vez, “no hay una relación lineal entre la precariedad de los niveles de vida y los conflictos provocados por quienes son afectados por ellos.” (Slater, 1985:10). Igualmente importante, este hecho arroja luz sobre por qué la participación de las clases obreras en los movimientos sociales parece estar menguando. En muchos de los estados latinoamericanos que siguieron políticas corporativas o populistas a partir de los años 40, los obreros industriales figuraron entre los primeros grupos incorporados al Estado, por lo general a través de confederaciones nacionales vinculadas ya fuera a los partidos gobernantes o a ciertas secretarías o posiciones de gabinete. En algunos países como

México y Perú, otras clases sociales como los campesinos y algunos sectores de la clase media también fueron incorporados a la coalición gobernante. Por supuesto, el hecho de que los obreros industriales (y los campesinos y las clases medias) se organizaran en movimientos sociales —las clases sociales de la época— nos ayuda a entender por qué el Estado los incorporó primero. Pero es útil recordar que el objetivo de estos movimientos sociales, entonces como ahora, fue obtener un mayor acceso a las instituciones, las prácticas y el poder del Estado, no distanciarse de él. Y lo lograron, aun y cuando la democracia no se materializó. Sus éxitos en este sentido, además, les dieron una proximidad institucional que otras clases y grupos sociales no alcanzaron. Es poco sorprendente entonces que las clases o grupos que se adhirieron a movimientos sociales en los periodos históricos subsecuentes no hayan sido los mismos trabajadores organizados de antes, debido a que muchos de estos grupos “viejos” ya contaban con un cierto acceso institucional al Estado, y eran los “nuevos” los que ahora clamaban por lo mismo.

Este escenario, así como mis comentarios anteriores sobre los diferentes grados de acceso ocupacional al Estado, incluso en el periodo contemporáneo, exige una lectura algo diferente del argumento de los teóricos de los nuevos movimientos sociales de que las identidades de clase están siendo reemplazadas por otras identidades sociales debido a la modernización (*i.e.* burocratización, comercialización y masificación) y a la disolución del ‘modelo de representación de intereses’ que esto produce. Que esto haya ocurrido en ciertos países de América Latina se debe a que la historia de la formación del Estado ha determinado que grupos organizados en torno a identidades de clase obrera han tenido mayor probabilidad de ser incluidos en las estructuras del Esta-

do, no a la modernización *per se*, cualquier cosa que esto signifique en el contexto latinoamericano. Desde mi punto de vista, entonces, estos grupos están menos inclinados a distanciarse del Estado y así menos inclinados a participar en movimientos sociales. En contraste, los grupos más propensos a participar en movimientos sociales son los que están más distanciados del Estado: no las así llamadas “viejas” organizaciones basadas en la clase, sino las así llamados “nuevos” grupos sociales organizados con base en identidades que el Estado no está preparado para incorporar o acomodar.

En consecuencia, los teóricos de los nuevos movimientos sociales pueden estar correctos en algunos sentidos, pero por razones incorrectas. Las identidades de clase pueden estar menos inclinadas que otras identidades sociales (de género, de raza, etcétera), a estimular movilizaciones, pero esto no se debe a que la clase carezca de significado, o a que la política de clase, ideológicamente hablando, sea obsoleta o antidemocrática, sino porque muchos de estos grupos están de hecho relacionados burocráticamente con el Estado. Esto significa, a su vez, que están menos motivados para desafiar a éste y/o manifestar sus demandas por fuera de sus estructuras, aunque algunas veces lo hagan si están distanciadas de otra manera, y nuestra estructura teórica debe ser lo suficientemente flexible para explicar esta posibilidad. En contraste, quienes se definen a sí mismos a partir de otras identidades sociales, históricamente han tenido menor proximidad o acceso al Estado, especialmente en los sistemas políticos corporativistas en los que las grandes organizaciones (obreras y campesinas por lo general) tienen más probabilidad que los ciudadanos de servir como base de participación política.

En breve, una vez que usamos las dimensiones de distancia geográfica, institucional y de clase res-

pecto del Estado como criterio para entender el grado por lo cual los ciudadanos o las comunidades forman o engendran movimientos sociales, resulta imposible sostener cualquier argumento general o universal sobre la desaparición de la dinámica de clase en los movimientos sociales, como lo hacen los teóricos de los nuevos movimientos sociales. En efecto, en algunos países, regiones o localidades las clases obreras permanecerán distanciadas del Estado y así estarán más inclinadas a participar en movimientos sociales a fin de ejercitar sus derechos o demandas políticas. En México, por ejemplo, la burocratización y corrupción de los movimientos laborales afiliados al Estado han orillado a muchos obreros industriales a participar en movimientos sociales y a acudir a la identidad de clase como base organizativa. Solo después de un examen detenido de esta particular dinámica institucional, junto con una comprensión amplia de la historia institucional y geográfica de la formación del Estado en América Latina, podemos entender por qué algunas clases o grupos económicos están distanciados de él y otros no, y por qué algunos de ellos son más propensos a participar en movimientos sociales.

Cultura

Un último conjunto de factores que puede influir en la distancia de los ciudadanos respecto del Estado es el de los factores culturales o sociales, que incluye lenguaje, etnia y hasta cierto punto el género, solo para mencionar unos cuantos. En muchos países latinoamericanos, los patrones históricos de colonización, migración, mestizaje e incluso el genocidio de pueblos nativos han marginado a ciertas poblaciones o comunidades definidas, generalmente, por su lengua, etnicidad o por alguna combinación de estos elementos. Y de hecho, otro

factor clave que distingue a América Latina de Europa y Estados Unidos es el grado de fragmentación cultural, especialmente en la forma de identidades múltiples y cambiantes cuyos portadores pueden localizarse en diferentes espacios.

Radcliffe y Westwood (1996:161) llaman la atención sobre esta condición, argumentando la importancia de "contextualizar" nuestro estudio de América Latina "haciendo referencia a esta geografía de las identidades [a través de las cuales] los dominados expresan ideas complejas sobre la comunidad nacional y su posición en ella".

Lo que yo denomino distancia cultural, como otras formas de marginación, a menudo se relaciona con aislamiento geográfico o institucional, el cual a su vez suele estar asociado con los procesos de formación del Estado y a veces con la formación de las clases. Radcliffe y Westwood nos recuerdan que aunque

las historias nacionalistas oficiales tienden a dar por sentado el perfil territorial del país, esto contrasta con lo fortuito de otros espacios de pertenencia expresados en las geografías 'populares' de identidad. El proyecto oficial de construcción de la nación puede apropiarse y/o recircular algunas de estas geografías de identidad. Por ejemplo, una geografía de identidad de élite criolla coloca a Quito en el corazón de Ecuador emocional, política y geográficamente. La centralidad de Quito para las identidades nacionales ecuatorianas es reproducida ampliamente en los documentos y el discurso oficial como elemento clave de la geografía imaginativa oficial. Sin embargo, fuera del proyecto oficial y a menudo en oposición a él, circulan las geografías de identidades no oficiales. (Ibid:161).

Cuando hablamos, pues, de ciudadanos culturalmente distantes del Estado no solo consideramos muchos de estos pueblos que han sido

deliberadamente marginados de éste, tanto en la práctica (a través incluso de la represión y la tortura) como en el discurso nacionalista, porque no encajan en las imágenes oficiales de nacionalidad o en los proyectos políticos e ideas económicas prevalecientes. También tenemos en mente un distanciamiento cultural proactivo que resulta de la identidad y la experiencia compartida que inspira a los pueblos a cuestionar las demarcaciones culturales y discursivas delineadas a partir del Estado nación.

Florencia Mallon (1995:59) utiliza el término "nacionalismos alternativos" para referirse a las formas en que los pueblos marginados por el Estado se organizan en torno a su propia comunidad y cultura a nivel local, a menudo en formas tales que resultan en nuevos compromisos y relaciones de estos pueblos con el Estado. De manera similar, el antropólogo Michael Herzfeld sostiene que aunque "algunos ciudadanos aceptan las normas culturales y legales oficiales menos voluntariamente que otros, [...] los no conformistas a menudo resultan ser los ciudadanos más leales en momentos de crisis" (Herzfeld, 1997:1). Así como Herzfeld argumenta que "a fin de explorar las posibilidades y límites de la disidencia creativa, [es necesario] dejar de tratar al Estado nación y al esencialismo como enemigos distantes e irreconciliables, y entenderlos como partes integrales de la vida social"

(1997:2), nosotros sugerimos que mediante una reformulación de las bases y formas de la distancia cultural entre los ciudadanos y el Estado podremos alcanzar un mejor entendimiento de la sociedad latinoamericana y así de un cuarto e igualmente importante factor del activismo de los movimientos sociales.

Lo que es importante recordar no es solo que ciertos pueblos están culturalmente excluidos del discurso y el imaginario del Estado, para usar el término de Benedict Anderson, sino que esta distancia tiene a veces una demarcación espacial, y que es la combinación de las distancias espaciales y culturales lo que ayuda a alimentar la creación de identidades alternativas. Las 'geografías populares' resultantes, como anotamos anteriormente, a veces devienen en bases de desafío de las imágenes hegemónicas del Estado al tiempo que refuerzan la identidad y el sentido. "Al proveer límites, social y espacialmente definidos, a las comunidades con las que la gente se identifica, las geografías de las identidades proveen espacios de pertenencia (frágiles y contingentes), sitios de vinculación emocional" (Radcliffe y Westwood, 1996:163) que a su vez tienen un potencial transformador.²⁶

Por supuesto, no es ninguna novedad que en muchos países latinoamericanos los pueblos indígenas y las minorías lingüísticas a menudo son ignoradas o dejadas de lado por las instituciones, las políticas y las prácticas del Estado, e incluso por el discurso nacional, y que tienen, por lo general, menos acceso institucional al Estado. México es uno de los pocos países latinoamericanos que han encarado este problema, en parte porque plantear la 'cuestión indígena' y arribar así a un nuevo concepto de 'La Raza' fue un paso importante en la consolidación política posrevolucionaria y en la formación del Estado. Pero incluso en México, al igual

26. En su estudio de la comunidad gay de San Francisco, Castells (1983:157) plantea un argumento similar: "Para ser una sociedad dentro de una sociedad, ellos [el Movimiento Gay] tuvieron que organizarse espacialmente para transformar su opresión en marco organizativo de poder político. Esta es la explicación de por qué la creación del *ghetto* de la calle Castro resultó inseparable del desarrollo de la comunidad gay como movimiento social. Reunio identidad sexual, autodefinición cultural y proyecto político en una forma organizada en torno al control de un territorio determinado".

que en la mayoría de los países de América Latina, encontramos muchos grupos lingüística y étnicamente demarcados, históricamente aislados del poder y la política, y concentrados y marginados en regiones apartadas del país. Y este distanciamiento, especialmente si va acompañado de otras formas de distanciamiento, puede ser un factor clave para explicar la naturaleza de la organización de los movimientos sociales, especialmente por qué los movimientos étnicos en América Latina pueden estar más inclinados a rechazar todo esfuerzo de vinculación con el Estado, y a luchar por la autonomía (ver Mattiace, 1996; LeBaron, 1993).²⁷ Los rebeldes zapatistas de Chiapas emergieron y se inspiraron en su propia marginación física y económica, y el liderato y los militantes se basaron en su singular experiencia en la selva Lacandona para fortalecer su carácter como movimiento social de oposición.

Junto con la etnicidad y el lenguaje, el género es otra fuente importante de identidad que puede ser entendida en términos culturales si no sociales. Otros académicos lo han identificado como relevante para entender los movimientos sociales contemporáneos en América Latina (Alvarez, 1990), y que puede contar para entender la distancia real y percibida de los ciudadanos respecto del Estado. En la mayoría de los países de América Latina, las

estructuras e instituciones del Estado han estado dominadas por hombres, y en este sentido las mujeres han sido excluidas o distanciadas. Esto es especialmente claro cuando se analiza al Estado nacional y su discurso.²⁸ El género, sin embargo, es una identidad o *status* social que no se asimila fácilmente con otras formas de distanciamiento, principalmente porque cruza el espacio, las clases y otras identidades como las étnicas. Algunas veces, sin embargo, el género da acceso a ciertas ramas del Estado en forma tal que privilegia a la mujer sobre el hombre. El estudio de largo plazo de Alejandra Massolo sobre la mujer en México ha mostrado que “la esfera local es el área pública más familiar a la mujer, en la que juega un papel activo en asociaciones de vecinos, redes de solidaridad y trabajo comunitario para la superación de insuficiencias y mejorar la calidad de vida” (1996:133).²⁹ No obstante, Massolo argumenta claramente que mientras “el nivel municipal de gobierno es *el más cercano y accesible* a las mujeres [...] suele ser detentado por hombres” (*Ibid*:133, énfasis nuestro). De este modo, las mujeres a menudo están institucionalmente distanciadas incluso de los procedimientos y prácticas del Estado a las que tienen acceso social o cultural. El distanciamiento de la mujer respecto del Estado, en breve, es complejo y a menudo se entrecruza con otras formas de distan-

27. Radcliffe y Westwood (1986:85) sostienen que los movimientos indígenas en América Latina a menudo rechazan negociar con el Estado y luchan por la autonomía completa porque su propia ‘comunidad imaginada’ no está limitada por los territorios del Estado nación. Los autores también señalan que “el espacio juega un rol central en la des-nacionalización de las identidades indígenas, remontándose a una historia que trasciende los límites nacionales modernos, especialmente el horizonte es transnacional” y esto conduce a una internacionalización del movimiento. Una discusión más amplia sobre la transnacionalización del movimiento maya véase LeBaron (1993).

28. Radcliffe y Westwood (1996:164) argumentan que “por medio de las ideologías y prácticas estatales de género que controlan la expresión de la sexualidad y las relaciones, el Estado nación conforma la reproducción de la población nacional, así como mediante sus políticas de educación y cierta biopolítica (relacionada particularmente con niños, conscriptos y mujeres) para influir en la subjetividad de los ciudadanos. 29. Debido a que la mujer generalmente se encarga de la administración y abastecimiento del hogar, de la obtención de agua, electricidad, techo y alimento, es ella la que a menudo toma la iniciativa en organizaciones locales que plantean estas demandas (Massolo, 1996).

ciamiento, lo que sugiere que el patrón de alejamiento o proximidad no es claro.

Por supuesto, hay excepciones. En las comunidades rurales con ciertas formas de migración estacional o internacional, por ejemplo, la mujer debe permanecer en casa, "feminizando" así a la comunidad en formas sorprendentes. Cuando esto ocurre, lo que vemos es una convergencia de varias identidades culturales o sociales que refuerzan la distancia respecto del Estado. Pero con mucho, la forma principal de distanciamiento que refuerza la distancia de género es institucional, tanto en términos legales como de participación formal en el gobierno; y esto está lejos de ser homogéneo en América Latina. En México, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, y en Argentina, bajo el gobierno de Perón, por ejemplo, las organizaciones de mujeres (organizaciones de madres) tuvieron presencia institucional en los partidos nacionales o en las estructuras del Estado. En México, al menos, esto dio el tono del avance institucional de la mujer en las estructuras del Estado y el partido, si bien no así en los niveles más altos de gobierno. El grado al cual el género se convierte en base de la emergencia del movimiento o la movilización social en virtud del papel que juega en el reforzamiento de la distancia de los ciudadanos respecto del Estado, está fuertemente relacionado con la historia nacional.

Pero ¿cómo deberíamos interpretar el hecho de que la mujer es generalmente considerada un soporte principal de los movimientos sociales en América Latina, o el alegato de que su feminidad permite la creación de nuevas identidades que pueden desafiar a las 'viejas' organizaciones basadas en la clase? Hay claramente algo de verdad en estos alegatos; pero, de nuevo, si consideramos seriamente el espacio podremos ver que muchos movi-

mientos sociales encabezados por mujeres son movimientos urbano-sociales, o movimientos organizados territorialmente en torno al barrio o la comunidad, en los que las demandas de servicios básicos de consumo colectivo, para usar el término de Castell, son prioritarios en la agenda. No son movimientos de mujeres *per se*. Sería equívoco, por tanto, concebirlos como 'nuevos' movimientos sociales solo porque las mujeres son las más dispuestas a participar en ellos. En vez de eso, sería más exacto considerarlos como de servicios urbanos en los que la distancia de la mujer respecto de las instituciones del Estado cuenta como un factor más, junto con otras formas de exclusión, para motivar la movilización. En consecuencia, no podemos concebir estos movimientos a partir de un proceso centrado en la política o en una estructura de identidad, sino a partir de cómo ambos procesos trabajan en conjunto. Y es por medio de un enfoque sobre las diversas formas de distancia del Estado y cómo y por qué éstas se pueden traslapar, que tendremos las herramientas conceptuales adecuadas.

La fuerza de la distancia teórica

Como precepto analítico y como punto de partida para re teorizar los movimientos sociales en América Latina, la noción de distancia es teóricamente poderosa porque ofrece nuevos y potentes instrumentos para evaluar por qué vemos movimientos sociales en ciertas localidades y entre ciertas poblaciones. La noción de distancia también es poderosa porque, además de ayudarnos a dismantelar la división de lo nuevo contra lo viejo, como ya lo anotamos, nos ayuda a trascender la polarización de identidad *versus* estrategia tan evidente en la teoría de los movimientos sociales. Después de todo, puede ser una marginación compartida, o distan-

ciamiento respecto del Estado, sentido por ciertas poblaciones lo que las impele a organizarse en movimientos; sin embargo, esta misma marginación y el deseo de remediarla pueden servir también como elementos de una estrategia de acción. Tercero, la noción de distancia es teóricamente poderosa porque nos ayuda a resolver uno de los desafíos analíticos más fuertes en la teorización de los movimientos sociales hoy: la tendencia creciente a ver movimientos sociales en todas partes y en toda conducta colectiva.

Joe Foweraker ha identificado este problema con perspicacia y humor al observar que “una amplia variedad de fenómenos sociales distintos de pronto han sido certificados con la etiqueta de nuevos movimientos sociales”, incluyendo a “danzantes folklóricos, tejedoras de canastos y virtualmente toda forma de vida social o económica.” (1995:4). Con esta proclividad a denominar movimiento social a todo lo que se mueve, para tomar la expresión ingeniosa de Foweraker, podemos estar perdiendo de vista la importancia teórica de diferenciar los movimientos sociales de otras formas de acción colectiva, preocupación que ha sido importante para proponer este campo de estudio. Estoy de acuerdo con Foweraker en que algo debe hacerse al respecto. Para mí, a fin de tener un buen sentido de lo que constituye un movimiento social, especialmente como algo distinto de la movilización revolucionaria o de la política de los grupos de interés (para referirme a los dos extremos de un continuo de conducta política colectiva), la noción de distancia es singularmente iluminadora.

Por ejemplo, como lo anotamos antes, hay muchísima evidencia de que los grupos que están considerablemente distanciados del Estado en sentido geográfico, institucional, de clase y cultura (piénsese en Sendero Luminoso) son más proclives a abra-

zar la acción revolucionaria, mientras que quienes están más cercanos al Estado, en todos estos aspectos se inclinan a usar las estructuras políticas formales para plantear sus demandas. Esto es, funcionan como grupos de interés en el sentido pluralista del término, usando su ya establecida proximidad a las estructuras institucionales o de participación del Estado para expresar sus preferencias. Los movimientos sociales se localizan en algún punto entre estos dos extremos sobre un continuo de distancia: son actores colectivamente organizados que están lo suficientemente lejos del Estado para movilizarse y plantearle demandas, pero no tan distanciados como para abrazar la opción de la demolición del Estado. La noción de distancia, en breve, es analíticamente poderosa en un sentido ordinal. La distancia extrema alimenta las actividades antagónicas de los movimientos revolucionarios o el rechazo total al Estado nación; la distancia moderada genera y sostiene el vigor organizativo de los movimientos sociales al tiempo que los mantiene ‘autolimitados’ en diversas maneras, para usar la noción de Cohen y Arato (1993); y la proximidad destruye ambas formas de oposición casi por completo, engendrando una conducta política conformista en la que los grupos compiten por su participación en las estructuras existentes del Estado sin proponerse reformularlas o cambiarlas.

Por supuesto, la noción de distancia no puede explicarnos todo sobre los movimientos sociales, o las revoluciones, o los grupos de interés. La noción de distancia puede arrojar luz sobre cómo exactamente los individuos forman grupos, e incluso sobre por qué los individuos pueden diferir ideológicamente. Al igual que con otros paradigmas teóricos, entonces, es importante reconocer que hay ciertas cuestiones sobre los individuos, la formación de los movimientos y la conducta política, como un

todo que permanecen elusivos, o que son mejor explicados por otros factores o experiencias, incluyendo la historia familiar del activismo, la educación, la experiencia en sindicatos, el desarrollo de redes sociales, etcétera, cuestiones planteadas por otros y recientemente validadas por Susan Stokes (1991) en su preciso estudio sobre el activismo de los movimientos sociales en Lima. Sin embargo, incluso estos factores más personales de nivel individual pueden ser reinterpretados en términos de cómo afectan el sentido subjetivo de alejamiento o compromiso del ciudadano con el Estado, sentido que influye en su visión de su propia eficacia política y de su forma deseada de acción política.

Desde mi punto de vista teórico, sin embargo, mucho del poder analítico del concepto de distancia descansa en su potencial para integrar los enfoques explicativo (estadounidense) e interpretativo (europeo) de los movimientos sociales. En efecto, la distancia respecto del Estado no solo arroja luz sobre quién es proclive a movilizarse, o sobre el tipo de actividades políticas que ciertos ciudadanos podrían abrazar, también nos dice algo sobre el contexto social y político más amplio en el que ocurren esas movilizaciones ciudadanas y movimientos sociales. Después de todo, los movimientos sociales son comunes en América Latina porque las estructuras del Estado son cerradas, porque un conside-

rable número de ciudadanos está distanciado de las estructuras formales del mismo; pero esto se debe a la naturaleza del Estado y a cómo se desarrolla institucional y geográficamente, y con respecto a ciertas clases y grupos culturales. Por tanto, mediante el análisis de la emergencia, fuerza y patrones de los movimientos sociales en América Latina a través del lente de la distancia del Estado, podemos averiguar mucho sobre los patrones de formación del propio Estado, así como sobre los movimientos sociales mismos, alegato similar al de los teóricos de los nuevos movimientos sociales sobre la modernidad y el mundo de vida. Sin embargo, mi posición interpretativa difiere enormemente de la de los teóricos de los nuevos movimientos sociales.

Los teóricos de los nuevos movimientos sociales conceptualizan su objeto como reflejo de una condición de la modernidad en la que el Estado y la sociedad están normativamente diferenciados, y los ciudadanos luchan para proteger su autonomía y evitar que el Estado traspase la esfera pública.³⁰ En contraste, sugiero que la amplia diseminación de los movimientos sociales, al menos en América Latina, es reflejo de la ausencia de modernidad, al menos como es entendida en Occidente, en sentido habermasiano. Los movimientos sociales son elementos transicionales claves en la batalla actual para crear una nación Estado más 'moderna' y justa, si por esto entendemos un Estado en el que las estructuras institucionales de gobierno están bien distribuidas y son accesibles a todos los ciudadanos en todos los lugares, no solo para unos cuantos privilegiados. Digámoslo en forma diferente, es precisamente porque la mayoría de los estados latinoamericanos carece de las así llamadas estructuras institucionales del Estado moderno, substantiva si no formalmente, y en algunos casos hasta de la

30. Esta presunción puede conducir a los académicos a rechazar el término movimiento social como descripción de cualquier organización popular que se articula con el Estado o con las instituciones de él mismo en cualquier forma. Yo aprecio la importancia de no considerar toda acción colectiva como movimiento social, y también pienso que es erróneo adoptar una definición demasiado estricta. En este ensayo he tratado de diferenciar los movimientos sociales de los movimientos revolucionarios y de la política, característica de los grupos de interés, sin adoptar al mismo tiempo una definición demasiado estricta de movimiento social.

infraestructura constitucional y legal para garantizar el acceso general o predecible de los ciudadanos a las estructuras del Estado, es por esto, decíamos, que los ciudadanos se encuentran tan distantes del mismo y es por esto mismo que los movimientos sociales son tan comunes.

Al afirmar esto *no* estoy sugiriendo, ni por un momento, que los países de América Latina son atrasados, lo que esto signifique, o que los movimientos sociales reflejen un subdesarrollo político según se entiende en cierto sentido normativo. Tampoco estoy sugiriendo que las luchas de los movimientos sociales en América Latina inevitablemente generarán la modernidad o producirán las así llamadas estructuras y prácticas del Estado moderno similares a las de la Europa contemporánea o las de Estados Unidos, aunque puede ocurrir algún progreso en este sentido, como lo sugerí arriba. Lo que estoy diciendo es que los movimientos sociales en América Latina aparecen como respuesta a un conjunto de estructuras y prácticas asociadas a un proceso desigual y centralizado de los procesos de formación del Estado totalmente diferentes a las de Europa y Estados Unidos. Y estas diferencias son las que cuentan para que el significado teórico e interpretativo de los movimientos sociales en Latinoamérica sea también diferente. Los movimientos sociales, entendidos como productores de demandas políticas colectivas, han aparecido prácticamente en todas la épocas y lugares. Que sus dinámicas sean distintas se debe al hecho de que las épocas y lugares son también distintos, cuestión formulada con gran detalle y perspicacia por Charles Tilly en su estudio de los repertorios cambiantes de la acción colectiva (1994). Precisamente a partir de la cuestión del tiempo es que los analistas de los movimientos sociales latinoamericanos empezaron a prestar más atención a la especificidad de su con-

texto político, especialmente respecto a la formación del Estado y a las estructuras y prácticas asociadas a la emergencia del Estado contemporáneo en América Latina. Yo he argumentado que el concepto de distancia es especialmente iluminador para entender este desarrollo.

Ciertamente, la comprensión del amplio contexto político de América Latina no está del todo ausente en la teoría y la investigación de los movimientos sociales. Existe un considerable conjunto de literatura que vincula la naturaleza y emergencia de estos movimientos a los gobiernos represivos y autoritarios, argumento que identifica y expone el amplio contexto político del poder ilimitado del Estado y de una sociedad reprimida en sus detalles más desagradables. Mi percepción es, sin embargo, que al enfocar sobre la fuerza organizativa del Estado o su poder de represión, los académicos de los movimientos sociales de algún modo han ignorado los grandes procesos de formación del Estado, el cual después de todo supone no solo el entendimiento de su estructura institucional y capacidad represiva, sino también las dinámicas espaciales, de clase y culturales que distancian o vinculan al ciudadano con el Estado. Y son estos factores, sostengo, los que cuentan para la emergencia y patrones de los movimientos sociales, no la fuerza o el carácter autoritario/democrático del Estado *per se*.

Sucede también que los movimientos sociales han florecido en una diversidad de sistemas políticos latinoamericanos, no todos ellos autoritarios, algunos más represivos que otros, y otros formalmente democráticos. Y esto ha ocurrido porque los ciudadanos pueden estar igualmente distanciados del Estado en las democracias y en las no democracias, así como hay patrones diferentes de acceso/cerrazón del Estado incluso en sistemas políticos

similares (autoritarios, competitivos vs. de partido hegemónico). Más aún, hay clara evidencia de que, bajo ciertas condiciones, los movimientos sociales en América Latina han estado dispuestos a poner por delante sus demandas de democracia formal aún teniendo otros medios para cerrar la distancia y/o asegurar su acceso participativo al Estado. El ascenso inicial de los sistemas políticos corporativistas y populistas en América Latina, los cuales deben su emergencia y carácter a los esfuerzos directos de los movimientos sociales, da testimonio de esta posibilidad.

Sin embargo, si vinculamos nuestra comprensión de los movimientos sociales a la naturaleza y a los patrones de formación del Estado, más que a la democratización o a la fuerza del Estado, especialmente si entendemos la formación de éste primordialmente en términos institucionales, espaciales, de clase y culturales, podemos tener los instrumentos analíticos para entender por qué países con diferente grado de autoritarismo manifiestan movimientos sociales similares, o por qué países que son democracias formales tienen, no obstante, movimientos sociales. Después de todo, hay mucho menos variedad de presencia y forma de estructuras centralizadas de Estado que tipos de regímenes políticos en América Latina. Reconocer esto puede ser un valioso punto de partida para analizar la proliferación y carácter único de los movimientos sociales en esta región particular del mundo.

Estrategias para acortar la distancia

Sugiero que la distancia de los ciudadanos respecto del Estado nos ayuda a entender por qué los movimientos sociales emergen en ciertas poblaciones o en determinados lugares de América Latina. Pero ¿puede esto decirnos algo sobre las estrate-

gias de acción de estos movimientos, o sobre la respuesta del Estado? En un sentido general, sí. Los grupos menos distanciados del Estado, por ejemplo, pueden ser más proclives a plantear demandas sobre políticas específicas, principalmente porque no es el proceso sino el resultado lo que más les interesa. Este sería el caso si contaran con un mínimo de acceso institucional al Estado. Los movimientos sociales basados en el trabajo que plantean demandas de salarios son un ejemplo. Alternativamente, los grupos más distanciados del Estado, institucionalmente o según cualquiera de nuestros criterios, pueden estar más propensos a plantear demandas sobre procesos y procedimientos, no solo sobre política, y al hacerlo así pueden estar poniendo en cuestión toda la lógica de toma de decisiones del aparato estatal, descubriendo así las formas sistemáticas por las que las demandas de ciertos grupos nunca llegan a la agenda de las decisiones del Estado. De nuevo, los zapatistas son un caso de prueba.

En medio de este continuo de distancia podemos ubicar a los movimientos sociales con suficiente distancia respecto del Estado para descreer de sus procedimientos, pero con suficiente acceso o proximidad para ver que a veces pueden hacer trabajar el sistema a su favor. Muchos de los movimientos sociales basados en barrios, comunes en las grandes ciudades capitales de América Latina, entrarían en esta categoría (especialmente si los administradores locales están en posición de responder a sus demandas). Y, en efecto, sus demandas son variadas en relación con su carácter estratégico: simultáneamente articuladas en términos de las demandas de políticas específicas para remediar las fallas o limitaciones inherentes a los procedimientos de las políticas establecidas o a las estructuras polí-

ticas mayores, cuestión que el trabajo de Manuel Castells (1984) ha dejado claro.³¹

Al evaluar las maneras en que la distancia del Estado arroja luz sobre las estrategias de los movimientos, debemos reconocer también que tanto la historia como la subjetividad cuentan en este proceso, en la misma manera en que influyen en la comprensión colectiva de los ciudadanos de su distancia del Estado. Por ejemplo, los grupos cuyas luchas para cerrar la más mínima distancia son constantemente rechazadas, podrían optar por demandas estratégicas sobre procesos, procedimientos y estructuras mayores, más que sobre políticas particulares. Los movimientos de gente pobre o de indígenas frecuentemente caen en esta categoría. A la inversa, los grupos que viven una extrema distancia respecto del Estado, especialmente si ven a otros grupos actuar similarmente, pueden optar por una estrategia moderada de reforma política, al menos inicialmente. Si fracasan, especialmente si otros grupos parecen tener éxito, se mostrarán inclinados a plantear desafíos más opositoristas, sobre todo porque en el proceso habrán llegado a entender su propia distancia. Todo esto significa que el proceso de planteamiento de demandas de parte de los movimientos sociales puede reforzar el sentido de distancia o proximidad, dependiendo de la respuesta del Estado.

Lo anterior plantea la cuestión de por qué los estados responden en la manera en que lo hacen a los ciudadanos movilizados y si la noción de distancia nos dice algo sobre las acciones del Estado y cómo y por qué éstas varían. De nuevo, propongo un cauteloso sí, pero con la advertencia de que una comprensión cabal de esta cuestión crucial está más allá de los límites de este ensayo. Los ciudadanos que cuentan con acceso a las instituciones del Estado contarán con las redes y los medios organizati-

vos para pugnar por acomodarse, y así el Estado estará mucho más dispuesto a responder. Los ciudadanos distantes, especialmente si están geográficamente aislados e institucionalmente ignorados, contarán con pocas redes e instituciones para provocar la respuesta del Estado a sus demandas.

Sin embargo, también es cierto que bajo ciertas condiciones, quizás bajo condiciones de crisis política severa, los estados, impulsados por razones de legitimación, podrían ignorar a las clientelas establecidas y responder a ciudadanos más distantes y excluidos, no solo a los distanciados institucionalmente, sino también a aquellos cuya distancia es evidente en el sentido de clase o de identidad cultural. Este podría ser el caso si los grupos distanciados acudieran a la violencia o a medios militares para exponer sus demandas, si bien esto, por otra parte, podría dar pretexto al Estado para reprimir a esos grupos por encontrarse precisamente tan lejos y tan fuera de la órbita institucional legítima. Piénsese en Fujimori. Asimismo, bajo otras condiciones, como una crisis fiscal extrema, los estados pueden estar poco inclinados a responder a movimientos sociales que le son próximos, sobre todo si sus demandas suponen gasto estatal adicional. La liberalización económica, en particular, puede imponer severos límites a la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas de los movimientos, especialmente aquellos cuyo distanciamiento o marginación se debe a la dinámica del mercado. En tales casos, los estados pueden responder en términos de apertura del proceso y de los procedimientos políticos, en vez de dar respuestas específicas a las demandas.

31. Es digno de notar que para Castells (1994) los movimientos sociales urbanos suelen rebasar a los partidos y aproximarse al Estado con sus demandas en la medida en que comprometen directamente a los partidos; pero la diferencia parece depender del contexto histórico.

Esta última posibilidad sugiere que la noción de distancia nos puede ayudar teóricamente a explicar la cooptación estatal de los movimientos sociales, o para ponerlo de modo más suave, a explicar por qué los movimientos pueden desmovilizarse o disminuir sus actividades opositoras aun en el caso de que sus demandas no sean satisfechas y/o cuando el Estado se manifieste como una fuerza leviantesca y absorbente. Esta es una cuestión de interés no solo para los estudiosos de países como México, donde los movimientos sociales han ido y venido durante décadas; también interesa a estudiosos de movimientos sociales en sociedades que están pasando por periodos de transición democrática, como Chile y Brasil. En estos contextos, un buen número de movimientos sociales ha quedado fuera de la escena, aunque otros persisten, y todo esto ha ocurrido pese al hecho de que no hay patrones claros con respecto a la democracia en cualquiera de las instancias.

Una manera de encarar esto es enfocando las estrategias particulares de reducción de la distancia empleadas por el Estado para acomodar a los movimientos. Distintos tipos de Estado tienen distintas maneras de atraer a los movimientos, estrategias que, si se prefiere, están menos ligadas a posiciones sobre democratización que a complejos cálculos económicos y políticos. Por ejemplo, los estados corporativistas semiautoritarios como México han respondido típicamente a los movimientos sociales mediante la apertura de las instituciones del Estado y las estructuras del partido. En el proceso, muchos ciudadanos han cerrado su distancia real respecto del Estado, aunque esto no significa que a partir de entonces hayan visto satisfechas todas sus demandas. El Estado mexicano, como otros de América Latina, ha aprendido también a crear nuevas redes patrón-cliente que producen la

aparición —y a veces la realidad— de proximidad al Estado y a su aparato de toma de decisiones. Estas estrategias sugieren que los actores estatales a menudo están muy conscientes que reformar las estructuras o las prácticas políticas para reducir el sentido de exclusión política o distancia de los ciudadanos puede a menudo resultar en una forma exitosa de contener otras movilizaciones opositoras, aunque éstas suelen ser informales e impredecibles. Por otra parte, tales estrategias pueden resultar adecuadas, incluso si la democracia es engañosa, siempre y cuando logren convencer a los ciudadanos de que su distancia respecto del Estado ha sido en verdad reducida. Esto también es claro en un caso completamente diferente, como el de Chile. En este país también vemos que los movimientos sociales han perdido fuerza, y mucho de esto puede atribuirse a los procesos de descentralización política relacionados con la transición a partir de un gobierno autoritario. Una vez que se crearon nuevas estructuras institucionales de gobierno a nivel local, donde se habían organizado muchos movimientos durante la dictadura, y con el restablecimiento de los derechos democráticos al menos en un sentido formal, la imagen y la realidad de la distancia han disminuido. Como consecuencia, muchos ciudadanos están acudiendo a las estructuras políticas de nivel municipal para presionar por sus demandas en forma tal que no era posible durante la dictadura, cuando las estructuras del Estado estaban controladas y altamente centralizadas. Pero esto no significa que los movimientos sociales hayan desaparecido; algunos ciudadanos aún se sienten distanciados del Estado o del actual proyecto de liberalización económica y política encabezado por el Estado chileno, ya sea a nivel local o nacional. Y esos son los ciudadanos más propensos a seguir alimentando la actividad de los movi-

mientos sociales. Además, el que los movimientos sociales hayan sido acercados al Estado a través de las nuevas estructuras institucionales y municipales no significa que todas sus demandas hayan sido cumplidas, como es claro en México respecto a la inclusión institucional de los movimientos en el partido gobernante. Con estos desplazamientos, otras formas de distancia (la de clase, por ejemplo) pueden resultar más decisivas.

Sin embargo, las nuevas estructuras políticas que facilitan el acceso institucional de los ciudadanos al Estado pueden igualmente sostener o extinguir la actividad de los movimientos sociales, como es evidente en el recién democratizado Chile y en el no democrático México. En Chile, por ejemplo, algunos movimientos sociales siguen bregando precisamente porque su nueva proximidad al Estado y sus estructuras administrativas (generalmente a través de su participación en estructuras municipales que fueron fortalecidas como parte de la liberalización democrática) les permite luchar en mejores condiciones para cerrar la distancia en otros aspectos, como los relacionados con la clase y la exclusión cultural. En México, en cambio, aunque la democracia substantiva ha sido elusiva, la inclusión de los movimientos organizados en las estructuras institucionales del Estado en general ha fomentado mayor organización y planteamiento de demandas (Davis y Márquez, 1997). Esto ha ocurrido a menudo no solo con respecto a los movimientos sociales que ya planteaban demandas, sino también con respecto a otros movimientos cuya distancia no había sido reducida por el Estado. Todo esto significa que una vez atraídos al Estado y sus estructuras, determinados movimientos adquieren una posición que les permite plantear más demandas, mientras que otros se sienten —y de hecho están— más excluidos de los beneficios del gobierno y de las estructuras del

Estado. Esto, a su vez, puede motivar el surgimiento de nuevas organizaciones colectivas y nuevas demandas.

El punto aquí, es que enfocar sobre las diferentes estrategias para cerrar la brecha no solo ayuda a explicar cómo y por qué los Estados son capaces de diluir la amenaza de los movimientos sociales, sino que también arroja luz sobre las formas en que los mismos movimientos pueden satisfacer sus demandas, y continuar quizás su movilización, incluso una vez que se han comprometido institucionalmente con el Estado. Y esto sugiere a su vez una paradoja: a menudo son los ciudadanos o movimientos sociales *menos* distantes del Estado quienes logran el mayor impacto, incluso si sus demandas son las menos revolucionarias y más reformistas. ¿Por qué? Porque su proximidad no solo hace más probable que el Estado responda a sus demandas, sino que fortalece más su propia organización, así como la ira de los grupos más distanciados. El resultado agregado es la acumulación de más y mayores demandas ciudadanas al Estado.

Esto nos lleva a reconsiderar el poder total y el impacto de los diferentes tipos de movimientos sociales. Mientras que la sabiduría convencional sugiere que los demandantes más extremistas y agresivos —o aquellos más distantes del Estado con las demandas más exigentes para el cambio— producirán el mayor impacto, y éste sería el caso de una situación revolucionaria, nuestra formulación, que deja de lado las demandas revolucionarias, sugiere prácticamente lo contrario. En efecto, aun y cuando las demandas de los movimientos sociales menos distantes del Estado serán probablemente menores o de orientación reformista, los efectos acumulativos de su movilización a largo plazo pueden resultar substantivos debido al hecho de que la dinámica de los procesos de acceso institucional y

planteamiento de demandas se refuerzan mutuamente.³² Este estado de cosas, por supuesto, suscitará dudas sobre qué tan dependientes o qué tan cooptados están estos movimientos debido a su mayor cercanía al Estado, de tal modo que nos vemos obligados a examinar críticamente nuestra propia definición de lo que es exactamente un movimiento social. No obstante, este esfuerzo de definición más precisa no es tan importante como la tarea de entender cómo las estrategias de los estados y los movimientos sociales para cerrar la distancia, dan pie a procesos mayores de formación del Estado y desarrollo político en América Latina.

Dialéctica de la distancia: algunos comentarios finales

Permítaseme concluir con tres proposiciones sobre la distancia y su relevancia teórica para el estudio de los movimientos sociales en América Latina y su papel e impacto en el cambio político. *Primero*, como he argumentado extensamente, tomando en cuenta la distancia geográfica, institucional, de clase y cultural de los ciudadanos respecto del Estado, podemos entender la emergencia de los movimientos sociales, la estrategias que siguen y las maneras en que el Estado responde a ellos.

Segundo, debido a que tanto los ciudadanos como el Estado frecuentemente buscan cerrar estas dimensiones de la distancia, sus acciones en este

sentido fomentan los procesos históricos de formación del Estado. Esto es así porque las estrategias para cerrar la distancia, por lo general, suponen el establecimiento de nuevas instituciones de gobierno o la instauración de otras formas y mecanismos para asegurar la proximidad o la inclusión política, formas que por sí mismas pueden cambiar el carácter institucional, el asiento regional del poder, y/o el contenido de clase del Estado. Mientras que la mayoría de los estados se empeñan en mantener relativamente estable la estructura de poder mediante la limitación del alcance de las reformas, sus esfuerzos pueden resultar frustrados cuando los ciudadanos se convencen de que hay distancia entre ellos y el Estado, situación que puede ocurrir de vez en cuando, aun y cuando no sea así respecto de una política en particular. Además, en el caso de que los ciudadanos acepten reformas limitadas o acceso en la forma de redes de patronazgo o cooptación altamente controladas, su acceso al Estado puede sostener su movilización y su capacidad para plantear demandas. En consecuencia, los esfuerzos del Estado y los movimientos para cerrar la distancia entre ellos funciona como un proceso dialéctico, el cual, a lo largo del tiempo, fomenta los procesos de formación del Estado.

Algo que no he sugerido, pero que me gustaría plantear como una *tercera* proposición a considerar es que este proceso dialéctico de negociación Estado-movimientos sociales sobre la disminución de la distancia tiene un significado y una importancia teórica mayor porque fomenta la extensión de la ciudadanía tanto como la formación del Estado. Como ha sido teorizado por académicos desde Max Weber hasta Ralph Dahrendorf, y recientemente por Soledad García en su estudio sobre la ciudadanía en América Latina, "la ciudadanía está asociada a la pertenencia a una comunidad política (el Esta-

32. Por supuesto, para algunos movimientos sociales el giro auto-articulado hacia demandas más radicales de derechos civiles puede resultar insatisfactorio respecto del objetivo general de cerrar la distancia. Como los movimientos revolucionarios, aunque sin-violencia, estos movimientos pueden resultar esenciales para la transformación del Estado y la creación de nuevos sistemas políticos.

do)", de tal manera que "la práctica de la ciudadanía deviene método de inclusión que en principio otorga el mismo derecho básico a individuos de distinta edad, sexo, creencias y color de la piel. Así, la ciudadanía es un medio para la obtención de derechos [...] (incluso si) implica obligaciones de las instituciones para responder a los ciudadanos [...]" (García, 1996:7). Interpretando lo anterior según la estructura presentada en nuestro ensayo, la ciudadanía es un proceso acumulativo de disminución de la distancia institucional, geográfica y de otro tipo entre los ciudadanos y el Estado. En este sentido, en vez de ver a la ciudadanía como ligada abstractamente a la re-emergencia de una sociedad civil autónoma, como ciertos académicos quisieran, nosotros la ubicamos en una comprensión del Estado y de los vínculos Estado-sociales, donde la noción de ciudadanía se originó.

Los movimientos sociales juegan un papel clave en la ampliación de la ciudadanía mediante su organización colectiva para asegurar la mayor proximidad respecto del Estado, proceso que puede ser conceptualizado como un acceso más predecible y un acomodo a las estructuras institucionales establecidas, los derechos y las disposiciones legislativas, así como al poder de toma de decisiones. Algunos países latinoamericanos pueden tener estas instituciones, derechos, disposiciones y prácticas jurídicas en sus constituciones y sistemas políticos, pero ha menudo han sido aplicadas disparejamente en poblaciones y espacios distintos, provocando que algunas poblaciones queden más excluidas que otras, como lo anotamos con anterioridad. En consecuencia, los objetivos y procesos de la extensión de la ciudadanía en América Latina están inextricablemente ligados a las actividades de los movimientos sociales, que emergen como respuesta a una historia de exclusión vinculada a cier-

tos patrones de formación del Estado. E incluso si los objetivos de estos movimientos permanecen incumplidos en este aspecto, el mero proceso de revelar y desafiar la distancia del Estado puede cuestionar los límites de las definiciones establecidas de ciudadanía y desatar nuevas luchas sobre su carácter y accesibilidad.

Todo esto ayuda a arrojar luz sobre las formas en que los movimientos sociales se articulan con la democracia, o mejor dicho, sobre cómo ciertos movimientos sociales pueden fomentar la transición del autoritarismo a la democracia.³³ Un puñado de movimientos dispersos de la clase media, en repudio de las demandas directas de mayor proximidad con el Estado bajo el disfraz de demandas de derechos civiles, no son suficientes para generar la transición democrática. Pero cuando las grandes masas de ciudadanos o movimientos sociales desisten completamente de la tarea de comprometer a las instituciones y prácticas existentes del Estado, es ya otra historia. Esto probablemente ocurriría bajo circunstancias excepcionales, como en Argentina después del repudio público masivo a la Guerra Sucia. Pero cuando esto ocurre se plantea un desafío al Estado en su conjunto, pues pocos grupos están confiando entonces en sus estructuras y prácticas. En este sentido, la legitimidad del Estado resulta fundamentalmente desafiada, situación que puede motivar a algunos actores estatales a reformar o a transformar profundamente las estructuras y prácticas políticas.

Esta dinámica puede explicar, entre otras cosas, por qué países como México han estado encantados con su 'transición' a la democracia por tanto tiempo. En un país con una larga historia de movi-

33. Para una discusión más amplia de esta dinámica en el caso de México, ver Davis y Brachet-Márquez (1997)

lizaciones sociales y de respuesta estatal, los ciudadanos han estado planteando continuamente demandas de mayor acceso al partido de Estado, y éste ha sido totalmente exitoso al responder sin borrar su perfil esencial de gobierno de un solo partido. La democracia, entonces, no se ha materializado, pero históricamente ha habido suficiente activismo de movilización social y reducción de la distancia para tener satisfechas a grandes porciones de la población, a pesar de que algunas de estas estrategias hayan derivado en mayor cooptación y fortalecimiento del Estado. No ha sido sino hasta recientemente, en medio de un *impasse* en una larga historia de demandas de movimientos sociales y de respuesta estatal, que los movimientos enfocados estrictamente a los derechos civiles y sin interés en vincularse con las instituciones del Estado mexicano se están volviendo más comunes, aunque siguen siendo una minoría en el horizonte del movimiento social.

Cualquiera que sea el resultado, una cosa es clara: aun en el caso de que la democracia estilo occidental no se materialice en todos los estados latinoamericanos, veremos nuevas estructuras estatales y una nueva relación Estado-sociedad que reconstruya y reorganice los viejos patrones de exclusión geográfica, institucional, de clase y cultural. La descentralización del Estado y de sus instituciones políticas seguramente es una parte clave del proyecto de democratización, pero es solo un paso en un largo y difícil camino hacia la democracia, precisamente porque es claro que no todas las clases y culturas están igualmente habilitadas para darlo. Necesitamos profundizar más sobre si y cómo las diversas fuentes de distancia pueden ser reducidas en un movimiento hacia la democracia, y entender las implicaciones de esto para los movimientos sociales, el Estado y la ciudadanía. Pero esto, por supuesto, es tema de otro estudio.

Bibliografía

- AGNEW, John A (1987). *Place and Politics*. London. Allen & Unwin.
- ALVAREZ, Sonia (1990). *Endangering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitional Politics*. Princeton University Press.
- ANDERSON, Benedict (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London. Verso Press.
- BENKO, George and Ulf Strohmayer (1996). *Space and Social Theory: Interpreting Modernity and Postmodernity*. London. Basil Blackwell.
- BENNETT, Vivienne (1995). *The Politics of Water: Urban Protest, Gender, and Power in Monterrey, Mexico*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- BRACHET-Márquez, Viviane (1997). "Mexican Sociology. Contradictory Influences". *Contemporary Sociology* 26/3. 292-296.
- CALDERÓN, Fernando and Elizabeth Jelin (1987). *Clases y movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires. CEDES.
- CALDERÓN, Fernando (ed.) (1985). *Los movimientos sociales ante la crisis*. Buenos Aires. CLACSO.
- CASELL, Philip (ed.) (1993). *The Giddens Reader*. Palo Alto. Stanford University Press.
- CASTELLS, Manuel (1984). *The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements*. Berkeley and Los Angeles. University of California Press.
- COHEN, Jean and Andrew Arato (1995). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, MA. MIT Press.
- COHEN, Jean (1985). "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements." *Social Research*, vol. 52, No. 4 (Winter). 1-27.

- COOK, Maria Lorena (1996). *Organizing Dissent. Unions, the State, and the Democratic Teacher's Movement in Mexico*. University Park, PA. Pennsylvania State University Press.
- DAVIS, Diane E. and Viviane Brachet Márquez (1997). "Rethinking Democracy: Mexico in Historical Perspective". *Comparative Studies in Society and History*, vol. 31, in press.
- DAVIS, Diane E (1994). *Urban Leviathan. Mexico City in the Twentieth Century*. Philadelphia. Temple University Press.
- (1994). "Failed Urban Democratic Reform: From Social Movements to the State and Back Again". *Journal of Latin American Studies*, vol. 26, no. 2 (May). 1-34.
- (1993). "The Dialectic of Autonomy: State Actors, Class Actors, and the Roots of Economic Crisis in Mexico, 1964-1982". *Latin American Perspectives*, no. 20, no. 3 (summer). 46-74.
- (1992). "The Sociology of Mexico: Stalking the Path not Taken". *Annual Review of Sociology*, vol. 18. 395-417.
- (1989). "Divided Over Democracy: The Embeddedness of State and Class Conflicts in Contemporary Mexico". *Politics and Society*, vol. 17, no. 3. 247-280.
- ECKSTEIN, Susan (1989). *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. Princeton. Princeton University Press.
- ESCOBAR, Arturo and Sonia Alvarez (eds.) (1992). *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*. Boulder CO. Westview Press.
- FEHER, Ferenc and Agnes Heller (1983). "From red to Green". *Telos* 59:35-44
- FOWERAKER, Joe (1995). *Theorizing Social Movements*. London. Pluto Press.
- (1993). *Popular Mobilization in Mexico: The Teachers' Movement, 1997-1998*. Cambridge. Cambridge University Press.
- and Ann Craig (1990). *Popular Movements and Political Change in Mexico*. Boulder, CO. Lynne Rienner Publishers.
- FOX, Jonathan (1993). *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization*. Ithaca. Cornell University Press.
- GARCÍA, Soledad, (1996). "Cities and Citizenship". *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 20, no. 1 (March). 7-21.
- GIDDENS, Anthony (1993). "Time and Space", pp. 175-211, in Philip Cassell (ed.), *The Giddens Reader*. Palo Alto. Stanford University Press.
- GOODWIN, Jeff (1996). "Caught in a Winding, Snarling Vine: A Critique of Political Process Theory". *Manuscript, Department of Sociology*, New York University.
- GRINDLE, Merilee S (1977). *Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico: A Case Study in Public Policy*. Berkeley and Los Angeles. University of California Press.
- HABERMAS, Jurgen (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge. Polity Press.
- (1987a). *The Theory of Communicative Action*, vol. 2. Cambridge. Polity Press
- (1987b). *The Philosophical Discourse of Modernity*. Cambridge. MIT Press.
- HARVEY, David (1996). *Justice, Nature, and the Geography of Difference*. London. Basil Blackwell.
- HARVEY, Neil D (1993). "The Limits of Concertación in Rural Mexico", pp. 199-217 in Neil D. Harvey (ed.), *Mexico. Dilemmas of Transition*. London. British Academic Press.
- HENRY, Etienne (1985). "Urban Social Movements in Latin America: Towards a Critical Understanding", pp. 127-147, in David Slater (ed.), *New Social Movements and the State in Latin America*. Amsterdam. CEDLA
- HERZFELD, Michael (1997). *Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State*. London. Routledge.
- JELIN, Elizabeth (1990). *Women and Social Change in Latin America*. London. Zed Books.
- (1987). *Ciudadanía e identidad. Las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos*. Geneva. UNRISD.
- (ed.) (1985). *Los nuevos movimientos sociales* (2 volúmenes). Buenos Aires. Centro Editor de América Latina
- JOSEPH, Gilbert and Daniel Nugent (1994). *Everyday Forms of State Formation*. Durham, NC. Duke University Press.
- KECK, Margaret (1989). "The 'New Unionism' in the Brazilian Transition", in Aired Stepan (ed.) *Democratizing Brazil*. New York. Oxford University Press
- KITSCHOLT, Herbert P (1986). "Political Opportunity Structures and Political Protest. Anti-Nuclear Movements in 4 Democracies". *British Journal of Political Science*, 16 (January).
- KOWARICK, Lucio (ed.) (1994). *Social Struggles and the City: The Case of Sao Paulo*. New York. Monthly Review Press.
- KRIESI, Hanspeter, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak, and Margo G. Giugni (1995). *New Social Movements in Western*

- Europe. *A Comparative Analysis*. Minneapolis, MN. University of Minnesota Press.
- LEBARON, Alan (1993). "The Creation of the Modern Maya", pp. 265-286, in Crawford Young (ed.), *The Rising Tide of Cultural Pluralism: The Nation-State at Bay?* Madison. University of Wisconsin Press.
- LEES, L.H. (1982). "Strikes and the Urban Hierarchy in English Industrial Towns, 1842-1901", in J.E. Cronin and J. Schner (eds.), *Social Conflict and the Political Order in Modern Britain*. Croom Helm. London.
- MAINWARING, Scott, Guillermo O'Donnell, and J. Samuel Valenzuela (eds.) *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*. South Bend, IN. University of Notre Dame Press.
- (1987). "Urban Popular Movements, Identity, and Democratization in Brazil". *Comparative Political Studies*, vol. 20, no. 2 (July). 131-159.
- and Eduardo Viola (1984). "New Social Movements, Political Culture, and Democracy: Brazil and Argentina in the 1980s". *Telos*, 61 (Fall).
- MALLON, Florencia (1995). *Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru*. Berkeley. University of California.
- MIGDAL, Joel S (1988). *Strong States and Weak Societies: State-society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton. Princeton University Press.
- MÁRQUEZ, Enrique (1987). "Political Anachronisms: The Navista Movement and Political Processes in San Luis Potosí, 1958-1985". In Arturo Alvarado (ed.) *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*. La Jolla, CA. Center for U.S.-Mexican Studies.
- MASSOLO, Alejandra (1996). "Mujeres en el espacio local y el poder municipal", *Revista Mexicana de Sociología*, 63/3. 133-145.
- MATTIACE, Shannon (1996). Does Race Matter? The Use of Racial Theory in Understanding Contemporary Indian Movements in Mexico and Latin America", *Anuario de Estudios Urbanos*, 3. 215-241.
- MCADAM, Doug (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago. University of Chicago Press.
- MCCARTHY, John and Mayer Zaid (eds.) (1979). *The Dynamics of Social Movements*. Cambridge, MA. Winthrop Publishers.
- MELUCCI, Alberto (1988). "Social Movements and the Democratization of Everyday Life", pp. 245-260, in John Keane (ed.), *Civil Society and the State*. London. Verso Press.
- (1984). "An End to Social Movements?", *Social Science Information*, 23/4. 819-85.
- (1980). "The New Social Movements: A Theoretical Approach", *Social Science Information*, 19/2. 199-226.
- O'DONNELL, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.) (1986). *Transition from Authoritarian Rule: Latin America*. Baltimore, MD. The Johns Hopkins University Press.
- *Politics*. Berkeley, CA. Institute for International Studies, University of California.
- OFFE, Claus (1985). "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics", *Social Research*, vol. 52, no. 4 (Winter). 817-867.
- OXHOM, Philip (1995). *Organizing Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in Chile*. University Park, PA. Pennsylvania University Press.
- PAOLI, Maria Celia (1997). "European Theory in Brazilian Sociology". *Contemporary Sociology*, 26/3. 296-302.
- RADCLIFFE, Sarah and Sallie Westwood (1996). *Remaking the Nation: Place, Identity, and Politics in Latin America*. London. Routledge.
- ROBERTS, Kenneth (1997). "Beyond Romanticism: Social Movements and the Study of Political Change in Latin America". *Latin American Research Review*, 32/2. 137-151.
- SCHNEIDER, Cathy Lisa (1995). *Shantytown Protest in Pinochet's Chile*. Philadelphia. Temple University Press.
- SCOTT, Alan (1990). *Ideology and the New Social Movements*. London. Unwin Hyman.
- SHORT, John R (1982). *An Introduction to Political Geography*. London. Routledge & Kegan Paul.
- SLATER, David (ed.) (1985). *New Social Movements and the State in Latin America*. Amsterdam. CEDLA.
- (1985). "The Peruvian State and Regional Crisis: The Development of regional Social Movements". Pp. 147-171, in David Slater (ed.), *New Social Movements and the State*. Amsterdam. CEDLA.
- SMITH, A.D (1986). *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford. Basil Blackwell.
- SOJA, Edward W (1987). *Post-modern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London. Routledge and Kegan Paul.

- (1997). *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places*. London: Basil Blackwell.
- (1989). *Postmodern Geographies*. London: Verso Press.
- (1985). "The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Rethorisation". In *Social Relations and Spatial Structures*, edited by Derek Gregory and John Urry. New York: St. Martin's Press, 1985.
- STOKES, Susan C (1991). "Politics and Lima's Urban Poor". *Latin American Research Review*, vol. 26, no. 2. 75-99.
- STORPER, Michael and Richard Walker (1989). *The Capitalist Imperative: Territory, Technology, and Industrial Growth*. New York: Basil Blackwell.
- TAMAYO Flores-Alatorre, Sergio (1996a). "La teoría de la ciudadanía en los estudios urbanos. Estado y sociedad civil, derechos ciudadanos y movimientos sociales". *Anuario de Estudios Urbanos*, 3. 183-212.
- (1996b). *Violencia y no-Violencia en los Movimientos Sociales*. México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
- TANAKA, Martín (1996). "La participación política de los sectores populares en América Latina: Algunas conclusiones comparativas sobre la consolidación democrática". *Debates en Sociología*, 20. 106-144.
- TAYLOR, Peter J (1989). *Political Geography: World-economy, Nation-state, and Locality* (second edition). London: Longman.
- TILLY, Charles (1994) *Reflections on Popular Contention in Great Britain, 1758-1834*. New York: New School for Social Research, Center for Studies of Social Change, Working Paper No. 181.
- (1992). *Coercion, Capital, and European States: AD 990-1992*. Cambridge and Oxford: Basil Blackwell.
- (1985). "Models and Realities of Popular Collective Action". *Social Research*, vol. 52, No. 4.
- (1984). "Social Movements and National Politics", pp. 297-317. In Charles Bright and Susan Harding (eds.), *Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- (1978). *From Mobilization to Revolution*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- TORRES, Blanca (ed.) (1986). *Descentralización y democracia en México*. México, D.F. El Colegio de México.
- TORSVIK, Per (ed.) (1981). *Mobilization, Center-periphery Structures, and Nation-building*. Bergen: University of Oslo.
- TOURNAINE, Alain (1987). *Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina*. Santiago de Chile: PREALUOIT.
- TURNER, Bryan S (ed.) (1993). *Citizenship and Social Theory*. Newbury Park and London: Sage Publications.
- WICKHAM-Crowley, Timothy (1992). *Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956*. Princeton: Princeton University Press.

